

LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Ariel Jerez ¹

1. Una problematización inicial a modo de introducción

¿Qué es participar? Su concepción vulgar arroja una doble acepción: “ser o formar parte” y “tomar partido”. Esta dualidad entraña la dinámica dialéctica del proceso histórico: una noción de unidad de pertenencia de la que se “forma parte” y a una “toma de partido por la facción política” que viabiliza el proceso de incorporación de la parte en dicha unidad. En términos históricos, la formación de la comunidad nacional se culmina con el proceso de construcción estatal a partir de las fuentes de poder político, económico, coercitivo y cultural presentes en un territorio, definiendo una relación de exterioridad/interioridad respecto a las diversas presiones – muchas veces combinadas- que imponen tanto los grupos considerados extranjeros como los sectores sociales subalternos presentes en las distintas sociedades.

En América Latina, las complejas relaciones políticas de dominación establecidas por el *modelo colonial* de articulación del poder político-estatal han dificultado la construcción de un proyecto de comunidad nacional inclusivo de unas sociedades constituidas por poblaciones indígenas y por los mestizajes producidos por las distintas olas migratorias que se acumulan a lo largo de cinco siglos de historia. Los intereses compartidos entre oligarquías primario-exportadoras y centros capitalistas, en las intrincadas relaciones de acumulación y explotación,

¹ Profesor del Dpto. Ciencia Política y de la Administración II de la Universidad Complutense de Madrid.

fundamentaron la organización cultural en una ideología liberal-positivista sedimentada en los postulados librecambista-esclavistas del siglo XIX. En este contexto patrimonialista altamente coercitivo, las instituciones liberal-representativas han visto distorsionado su funcionamiento a la hora de procesar políticamente las demandas de reconocimiento material y simbólico que realizaban los sectores subalternos a lo largo del siglo XX.

Los proyectos políticos impulsados en el continente latinoamericano por la participación y la movilización de clases medias y/o populares han cerrado sus respectivos ciclos históricos sin haber cumplido sus principales objetivos de integración social y política. La intervención militar directa o la desestabilización política indirecta, combinando distintos grados de cooptación y represión, han sido las principales estrategias políticas de alianza entre elites internas y externas. La violencia política y los juegos institucionales limitados han hecho fracasar todo intento de innovación institucional que aprovechara la potencia socialmente democratizadora presente en los proyectos de los sectores subalternos. Con la perspectiva que otorga el siglo XXI, de forma paulatina pero cada vez más evidente, se constata como la situación de dependencia también se extiende al plano intelectual, a los ideales que han dirigido la acción política y a los conceptos que han orientado el análisis político y social.

Los diversos procesos de movilización que se producen a lo largo del primer tercio del siglo XX empiezan a dar cuenta de la creciente diversificación de la estructura socioeconómica a medida en que emergen sectores medios, agrarios y urbanos, que en un principio cuestionan el inmovilismo del poder oligárquico, con el apoyo de movimientos estudiantiles y militares, y de un movimiento obrero conformado por inmigrantes que empieza a tomar cuerpo en unas duras condiciones represivas del modelo primario-exportador. Con distintas estrategias de movilización caudillista, electoral o insurreccional, en los diferentes países se logran avances en la ampliación del voto, en el mejoramiento de

la representación política, la extensión educativa o la moralización de la vida pública y política.

El complejo contexto internacional de la primera mitad del siglo XX, con las revoluciones socialistas y las contrarrevoluciones fascistas, la crisis del 29, las guerras europeas y el traspaso de la hegemonía capitalista de Inglaterra a Estados Unidos, posibilita la aparición de una nueva alianza de clases entre sectores medios, populares y sectores industriales que apoya la incorporación política de las clases trabajadoras urbanas, la industrialización y una intervención estatal modernizadora en lo económico y redistribuidora en lo social. Se iniciaba el llamado ciclo nacional-popular, que se iría cargando de contradicciones a medida que la industrialización avanza poniendo en evidencia los límites externos e internos al intento de consolidar un modelo endógeno de desarrollo. En la medida en que el pacto populista interclasista mantenía intocadas las bases rurales del poder oligárquico, la reacción desestabilizadora no tardó en llegar de mano de las fuerzas armadas con el apoyo externo del capital financiero.

Si bien el reconocimiento de derechos laborales, sindicales y la construcción política de un imaginario de transformación protagonizado por el *pueblo* sirvieron para encuadrar el apoyo de las clases populares, el nacional populismo como modelo de organización y liderazgo tiene distinto alcance y perdurabilidad política en los diversos contextos nacionales. La organización sindical propiciada en sus fases iniciales otorga a las clases trabajadoras un importante poder de negociación en la disputa redistributiva y la voluntad de impulsar un proyecto de desarrollo nacional autónomo, lo que en el contexto de la *guerra fría* empieza a ser interpretado en el registro de contención anti-comunista que promueve Estados Unidos.

La alianza de clases que estaba en la base del proyecto nacional-popular empieza a resquebrajarse ante la dificultad de avanzar en el proceso de modernización económica que impulsan los sectores desarrollistas, polarizándose las clases medias hacia el proyecto autoritario encarnado en el intervencionismo militar o

hacia la radicalización revolucionaria. En la búsqueda de un desarrollo nacional autónomo el éxito de la revolución cubana en 1959 se convierte en un referente continental que refuerza la emergencia de una nueva ola de guerrillas armadas en la mayoría de los países de América Latina durante los años sesenta y setenta. El golpe de Estado contra el gobierno chileno de Salvador Allende en 1973, el primer gobierno socialista que llegaba al poder vía electoral, ponía de manifiesto la respuesta regional que preparaban las elites políticas transnacionalizadas para desarticular un ciclo de movilización social masiva, con una alta polarización ideológica, en el que participaban buena parte de las generaciones más jóvenes del continente.

La progresiva consolidación del estado burocrático-autoritario en la región en las décadas del sesenta y setenta ponía de manifiesto la articulación de intereses entre sectores primario-exportadores, sectores industriales y tecnocráticos con el capital transnacional, que impulsaba el nuevo modelo de desarrollo dependiente basado en el endeudamiento externo. Para ello era preciso que culminase el proceso de exclusión de los sectores populares en una pugna redistributiva altamente inflacionaria, desarticulando sus bases organizativas dentro de una estrategia represiva que se sistematiza dentro de la doctrina de seguridad nacional y que con el apoyo estadounidense se coordina en la región. Las políticas neoliberales aplicadas en la mayoría de los países por esta nueva alianza transnacional hacen que la década del ochenta sea considerada por la CEPAL como la *década perdida* de crecimiento económico, en la que se agravan los procesos de concentración de renta y de exclusión social.

En estas condiciones de desorganización política de los sectores subalternos, el retorno de la democracia a la región a principios de los años ochenta no puede evitar que el proceso de ajuste estructural promovido activamente desde los organismos multilaterales agrave la dependencia externa y el deterioro de la capacidad de acción estatal. La derrumbe de la Unión Soviética permitía que la hegemonía neoliberal alcanzase tal intensidad como para decretar el *fin de la historia*, permitiendo que el

diagnóstico de ingobernabilidad por recarga de demandas se mantuviese vigentes en contextos sociales y estatales marcados por carencias y pérdidas de capacidades crecientes. La búsqueda de estabilidad macroeconómica en los parámetros políticamente excluyentes del *Consenso de Washington* desemboca en la puesta en marcha de planes de convertibilidad cambiaria que, dependiendo del manejo de otras variables económicas, tienen distintos impactos sobre el crecimiento industrial y el endeudamiento externo.

Ya entrados en el siglo XXI, con dos décadas de vida democrática que vieron el retorno del *neopopulismo catódico* (Collor de Mello, Menem, Fujimori), el aumento de la corrupción y las nuevas conexiones estatales con la *economía criminal*, la dificultad de retomar la senda del crecimiento económico sostenido y equilibrado. El siempre postergado *reparto de la tarta* es un horizonte que vuelve a mediar el conflicto político derivado de las nuevas tramas de exclusión social y las nuevas dinámicas de participación de los sectores populares y medios, donde la intensidad de ambos procesos vuelven a interrogar a las naciones latinoamericanas sobre su futuro.

Antes de intentar ver en qué consisten y cómo se interpretan estas nuevas prácticas participativas en contextos de exclusión y deterioro institucional, es necesario señalar aunque sea brevemente la mirada sesgada que recibió la conflictiva participación en América Latina en las escuelas que hegemonizaron la interpretación del cambio social y político en la región desde mediados del siglo XX.

En las coordenadas de dependencia que también se extienden al plano intelectual, la producción de pensamiento social de la región pareció moverse entre la *sociología de lo inexistente* y la *sociología del deseo* (Sorj, 1991). En la búsqueda del *desarrollo* se intentan cubrir las *etapas* recorridas por los países centrales, o recorrer los *atajos* conseguidos por revoluciones socialistas situadas también en otras coordenadas geopolíticas y culturales. Para ello, durante buena parte del periodo, la reflexión persigue un tanto peregrinamente el factor

ausente o el sustituto funcional de ciudadanías y elites con culturas políticas “democráticas”, burguesías nacionalmente responsables, movimientos obreros adecuadamente ideologizados por vanguardias con orientación estratégica, procedimientos institucionales adecuados, etc.

La *sociología de la modernización* concibió el cambio social como un tránsito de la comunidad agraria tradicional a la moderna sociedad urbana de masas, por lo que la participación tuvo dificultades para racionalizarse dentro de las pautas de cultura cívica que *debieran* acompañar la democracia representativa que orienta su horizonte de modernización política. El liderazgo caudillista y la dinámica movimentista que impulsa la incorporación de los sectores populares son interpretados en términos de anomalía en relación a las pautas de racionalización política que, según determinada interpretación estructural funcionalista, se había producido en los países centrales recorriendo etapas más dilatadas temporalmente en las distintas fases de construcción de ciudadanía.

La *escuela dependentista* aportaba a través de sus diversas sensibilidades teóricas nuevas perspectivas para entender, además del funcionamiento de la nueva dependencia externa, cómo se reproducía la dominación colonial al interior de las respectivas sociedades, que lastraba la posibilidad de articulación de un proyecto endógeno de desarrollo. La lectura de los procesos de movilización y participación en clave estrictamente revolucionaria de la lucha de clases que hacen los sectores vanguardistas no logra distanciarse de la creciente polarización ideológica que redujo el campo político a la lógica amigo-enemigo que promovía la guerra fría. Tras el fin de las represivas dictaduras en los años ochenta y las guerras de baja intensidad que se ponen en marcha en Centroamérica, la derrota del proyecto revolucionario interrogaba sobre los excesos de voluntarismo ideológico y la adecuación del análisis político realizado durante el periodo.

Los *estudios de la redemocratización* que emergen para explicar las transiciones a la democracia se plantean la necesidad

de desprenderse de los grandes marcos interpretativos y recuperar el valor de la democracia como procedimiento. Se opera un recorte teórico que centra el foco de su análisis en la autonomía del proceso político-institucional, que margina el análisis de los procesos de participación a un factor contextual de las negociaciones entre sectores aperturistas del viejo régimen y la oposición moderada. Los sectores de la oposición considerados maximalistas son los que portaban las demandas sustantivas de democracia, y en buena medida están detrás de la *resurrección de la sociedad civil* pero que quedan fuera de la negociación de lo que será el nuevo escenario político-institucional. Sin su concurso en la concertación política que se va estrechando en un contexto de ajuste macroeconómico, los estudios de redemocratización van reconociendo cómo los procedimientos democráticos pactados no logran superar dinámicas delegativas, patrimonialistas y obstaculizan la posibilidad de recuperar la acción estatal para el desarrollo, y la consiguiente construcción de ciudadanía.

En buena medida estas líneas de investigación descuidaba tanto las múltiples dimensiones político culturales que encerraban los procesos de participación, como el estudio de otros factores realmente actuantes. La difusa noción de la “informalidad” paradójicamente muestra una gran capacidad de estructuración social e institucional, que va desde las diversas iniciativas de supervivencia económica de los sectores populares hasta los espacios opacos donde la corrupción oficial se conecta con la economía criminal. La exitosa obra del brasileño Fernando Meirelles, *Cidade de Deus*, ha puesto de manifiesto a públicos masivos que cuando la ciudadanía deja de ser un referente para la participación de las clases subalternas, éstas están disponibles para participar en lógicas comunitaristas destructivas.

Este artículo busca captar la dinámica participativa que impulsan los actores sociales subalternos en el modelo de democracia restringida desde los años setenta hasta la actualidad. La amplitud de esta empresa exige limitar el análisis de los actores más institucionalizados -partidos y sindicatos- a los

momentos en los que su acción contribuye a hacer prósperas las iniciativas de los movimientos y organizaciones sociales. Al mismo tiempo, el carácter multifacético de la participación sociopolítica ha dificultado hasta fechas recientes la investigación comparada y la construcción de indicadores que permitan acometer una perspectiva que presente cabalmente la multifacética realidad regional.

En la actualidad, Brasil es el país que muestra una sociedad civil más vigorosa habiendo impulsado lo que posiblemente pueda considerarse el mayor laboratorio de experimentación participativa del mundo². Es probable que nuestra atención parezca sesgada hacia este caso nacional, pero con las distintas iniciativas que se analizan de este país se intenta mostrar la enorme energía participativa que converge en Porto Alegre en el 2001, convirtiendo esta ciudad en referencia mundial de lo que, tras una década de recomposición de la

² Parece pertinente justificar esta afirmación con una mínima perspectiva histórica: 1) su dimensión continental y poblacional alberga situaciones extremas de desarrollo y subdesarrollo desde las que se ha activado una amplia combinación de luchas sociales; 2) el éxito relativo de su modelo desarrollista autoritario posibilitó la postergación del inicio del ajuste macroestructural y, como efecto ni querido ni deseado, la emergencia tardía de un movimiento obrero que consiguió renovar las estructuras sindicales autoritarias y apoyar la creación de un partido de masas de izquierda democrática no socialdemócrata (el *Partido dos Trabalhadores*); 3) el haber salvaguardado una capacidad estatal de regulación e intervención, permitió una *lenta, gradual y segura* liberalización donde los partidos se mantuvieron como importantes intermediadores en las políticas urbanas en un plano ideológico-cultural 4) la evolución del proyecto nacional populista y el suicidio político de Vargas, comparado con el caso argentino, generó una subcultura populista lo suficientemente permeable como para facilitar interacciones con otras subculturas de izquierda; 5) la temprana instauración del estado burocrático autoritario (1964) contuvo la deriva revolucionaria - que en otros países sería "resuelta" con una represión de tal envergadura que acaba con la mayoría de redes y espacios de participación y resistencia-, forzando un trabajo de base cuyo desarrollo paulatino a lo largo de tres décadas consolidó innovadoras propuestas de izquierdas que son referencia incluso para la socialdemocracia europea (como es el caso del Presupuesto Participativo de Porto Alegre).

izquierda después de la caída del muro berlinés en 1989, quiere plantearse como un nuevo modelo de democracia participativa a desarrollar en escala global.

No obstante, es pertinente tener presente que el retorno de la democracia a la región en los años ochenta fue acompañada de procesos participativos que mostraban intensidades diversas en los distintos países. Se ponía de manifiesto que, tras esas movilizaciones, existían tejidos sociales diferenciados en lo que respecta a la consistencia organizativa, a la articulación interasociativa así como a la capacidad para presionar la apertura de la esfera pública a sus demandas de democratización. Sobre esta reactivación no sólo pesaban las características y el ritmo del proceso de liberalización, sino también el grado de marginación y represión que hubiesen sufrido los sectores populares durante los periodos autoritarios. Por esta razón, la cuestión de la memoria histórica se convierte en una compleja problemática a manejar creativamente en lo que se pretende que sea una nueva cultura democrática. En última instancia, una perspectiva estructural menos coyunturalista, nos remite a las distintas capacidades que hubiese mantenido el Estado como agente redistribuidor-tanto en lo material como en lo simbólico, que en las distintas realidades nacionales posibilitó y viene posibilitando diferentes tipos de relación con esos sectores populares y medios abocados a intentar construir ciudadanía.

En lo que sigue abordamos, pues, la nuevas dinámicas de participación desde cuatro perspectivas: a) De los movimientos de base a las redes de movimientos sociales; b) La lógica ambivalente del tercer sector; c) Yendo hacia abajo: la participación en los gobiernos locales; y d) Yendo hacia arriba: redes transnacionales y el Foro Social Mundial. Se concluye planteando la necesidad de abordar la participación en su capacidad de impulsar una transformación cultural que va más allá del campo político-institucional.

2) De los movimientos de base a las redes de movimientos

Los conflictos sociales de finales de los años sesenta y principios de los setenta hacían patente el crecimiento de los movimientos sociales urbanos en Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo que inspiraban una nueva perspectiva de estudio de la participación que se alejaba de la tradición sajona del *civic culture* dominante hasta ese momento. Los trabajos de los españoles Manuel Castells y Jordi Borja imprimen un importante giro a la sociología urbana, que empieza a considerar estos movimientos como síntomas de las contradicciones de la reproducción capitalista que cuestionan la legitimidad del orden existente politizando la cotidianeidad al reclamar servicios y equipos de consumo colectivo (Jacobi, 1989).

En la América Latina de finales de los setenta es en las universidades brasileñas donde se desarrolla esta línea de investigación en profundidad. Recordemos que Brasil en 1974 está comenzando su proceso de liberalización que permite la vuelta paulatina de investigadores exilados por el mundo. Todavía en un contexto autoritario, la bulliciosa emergencia de los movimientos populares tiende a ser estudiada desde una óptica “heroica” que enfatiza su potencialidad de transformación social en relación a la deslegitimación del Estado -aunque ya se apuntan las limitaciones que dicha potencialidad encuentra en un contexto político excesivamente clientelar-. (Cardoso, 1994; Dagnino, 1994).

Los movimientos sociales urbanos de los países latinos son en los años setenta principalmente *materialistas*: asociaciones de vecinos que negocian de un modo pragmático la satisfacción de sus demandas básicas en torno a agua, asfalto, salud, etc. La progresiva institucionalización de las prácticas del movimiento en distintos tipos de *conselhos* y asambleas barriales en muchos casos se interpreta como un reflujo del movimiento. El énfasis en el carácter “anti”, espontaneísta y confrontativo de la primera generación de estudios pasa a un segundo plano a medida que avanza el proceso de transición hacia la democracia.

En los años ochenta, un marco interpretativo más distanciado permite una mayor problematización respecto a las políticas sociales, buscando captar las contradicciones y tensiones entre los imperativos de la reproducción del capital y las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo (Jacobi, 1989). La expansión y creciente complejidad que sufre el Estado durante el periodo autoritario se realiza dentro de un marco gerencial que se articula en *anillos burocráticos*, agencias estatales y elites empresariales vinculadas al desarrollo de políticas públicas. Es un escenario más amplio para observar la búsqueda de interlocución para las demandas sociales de los movimientos (Nunes, 1987; Oliveira, 1987)³. En este contexto empiezan a ganar visibilidad las iniciativas que intentan ir más allá de las redes clientelares, generando dinámicas de interlocución que son analizadas desde las potencialidades para la concertación⁴ (Dos Santos, 1985. Calderón y Dos Santos, 1988).

³ La conexión interna observada entre la política tradicional-clientelista y las formas de participación modernas y/o radicales, recomienda no simplificar la problemática en términos de antinomia. En las situaciones de falta de autonomía existen relaciones de solidaridad y confianza que dinamizan la cultura de las tramas informales de autoayuda y de las redes políticas, modificando la posibilidad de transformar prácticas y representaciones en la resolución cotidiana de problemas de supervivencia en contextos de creciente marginación social y privación material. La noción de intercambio de favores por votos no da cuenta de una relación mucho más compleja, conflictiva y, eventualmente, abierta al cambio (Gay, 1998; Auyero, 2001).

⁴ Ya se señaló la imposibilidad de abordar la participación sindical. No obstante, es pertinente apuntar la compleja tesitura que viven los sindicatos y el movimiento obrero en el marco del ajuste estructural, que tiende a fragmentar la cohesión en sus bases, a limitar –cuando no cerrar– los diálogos y espacios de negociación-concertación y obstaculizar la renovación de liderazgos y estrategias. En el caso brasileño, el atraso relativo del ajuste permite una importante renovación en el liderazgo que lleva a superar estrategias estrictamente defensivas y a apostar por estrategias de concertación (*acuerdos neocorporativos en las cámaras sectoriales*) a partir de la participación e implicación activa de los sindicatos en el proceso de reestructuración productiva, lo que convierte el éxito inicial de estas

Dependiendo de las características apuntadas de la dictadura y de los ritmos y secuencias del proceso de democratización y de ajuste, el nuevo marco institucional democrático tiene distintas posibilidades de asumir compromisos con las soluciones definidas por los que las reivindican. Según sean las capacidades puestas en juego en la relación sociedad civil-estado se constata en la participación sociocomunitaria la continuidad de dinámicas particularistas, cooptativas y clientelares promovidas por la mayoría de los partidos tradicionales. O, por el contrario, se producen nuevas articulaciones sociopolíticas, generando esquemas de acción que buscan promover pautas alternativas en el desarrollo urbano y la innovación institucional. Un enfoque cada vez más comparativo empieza a mostrar la contradictoria simultaneidad de estrategias de experimentación institucional producto de la acción colectiva innovadora y la lógica institucional adaptativa en un contexto de crisis estructural. (Calderón y Dos Santos, 1987; Gorlier, 1992; Villasante, 1994; Tanaka, 1995; Munck, 1995).

En contextos institucionales favorables, la participación promovida por los movimientos implica, por un lado, la aparición en el plano micro de nuevas subjetividades políticas y, por otro lado, un cambio cultural donde se recompone la idea de ciudadanía y de la propia democracia. Una perspectiva *constituyente* empieza a plasmar esta transformación cultural que

experiencias en un importante referente político para el resto de movimientos (Leite, 2000). Por el contrario, en el caso argentino, la dinámica cooptativa de las centrales sindicales dificulta cualquier intento de concertación a lo largo del periodo de ajuste, provocando una creciente fragmentación de la acción colectiva en la que el clásico instrumento de la huelga pierde protagonismo. Un repertorio confrontativo (piquetes que cortan rutas, “saqueos” a supermercados, “estallidos” (motines) locales como el *santiagazo* de 1993) va emergiendo protagonizado por las distintas categorías de empleados públicos que actúan junto a otros sectores no asalariados (mujeres, vecinos, desocupados, etc.) (Carrera y Cotarelo, 2000). Como pone de manifiesto comparativamente el caso brasileño, la mayor o menor fortaleza del movimiento sindical será clave para la dinamización de otras redes sociales de participación.

busca nuevas gramáticas sociales para la democracia con el objetivo de viabilizar *el derecho a tener derechos*, en expresión ampliamente extendida en la región entre los analistas de inspiración arendtiana y lefortiana (Lechner, 1988; Jelin, 1994; Doimo, 1995).

El enfoque paulatinamente amplía su marco de análisis para intentar ir más allá del proceso de articulación de demandas consideradas más o menos fragmentadas y/o corporativas, para atender la capacidad de innovación cultural de los actores sociales, descubriendo algunas novedades en los contenidos político e ideológico de sus demandas. De hecho, la reivindicación ética ocupa un espacio central tras la represión de los periodos autoritarios⁵. Es un cambio importante respecto a la concepción ética prevaleciente también respecto al ciclo *nacional popular* que impulsó la ciudadanía facilitando el acceso de las masas a ciertos consumos colectivos. Como señaló tempranamente García Delgado (1984) para el caso argentino, se trastocaban los términos de la ecuación, pasando de demandas centradas en la redistribución tanto en el ingreso como en el consumo hacia otras que plantean la reclamación de poder y sentido.

Una perspectiva culturalista emerge para constatar las múltiples dimensiones que tiene el papel de la sociedad civil en la democratización de sociedades y no ya sólo de los regímenes. A lo largo de los años ochenta y noventa crece el número y la amplitud de movimientos que impulsan demandas *postmateriales*, cada vez más definidas en torno al reconocimiento de identidades de género y etnicidad. Se

⁵ Está dinámica es visible en los países del cono sur desde principios de los años ochenta, pero también más tarde en los países centroamericanos atravesados por conflictos armados, y en los andinos con la nueva lectura que se hace de los conflictos entre el Estado y las comunidades indígenas. El repertorio de visibilización impulsado por las *madres-abuelas de plaza de mayo* se convierte en referente global de las luchas por la memoria con la que los sectores sociales represalidos intentan reingresar en la comunidad política (Jelin, 2001).

reclaman contenidos éticos y culturales que buscan positividad legal apoyándose en redes de trabajo más articuladas (organizaciones profesionales de abogados, periodistas, de derechos humanos, universidades). Desde una mirada de *nuevos movimientos sociales* se empieza a observar que, además de los conflictos de clase y redistributivos, otras dinámicas de marginación activan luchas por el reconocimiento. (Scherrer Warren, 1993).

Estas luchas reclaman combinadamente un mayor y mejor reconocimiento tanto material como simbólico, desarrollando prácticas y significados que desafían el orden dominante, autoritario y excluyente con concepciones alternativas de la feminidad, de la naturaleza, de la economía, de la democracia, de la ciudadanía. El accionar de los movimientos es analizado en tanto productores de *políticas culturales* y de *cultura política*, que a partir de resignificación de nociones como derechos, espacios públicos y privados, formas de sociabilidad, o ética, redefinen lo que cuenta como político, ampliando la esfera pública (Alvarez, Dagnino y Escobar, 2000).

En Ecuador vemos un ejemplo ilustrativo de la evolución híbrida de demandas materiales y posmateriales constructoras de identidades étnicas que haciendo crecer el trabajo en red, alcanzan formulaciones políticas amplias. La alta movilización y organización de los movimientos a lo largo de las dos últimas décadas ha impulsado el *Pachakutik*, un nuevo ciclo en la historia de las naciones indígenas⁶.

⁶ Dentro de la cosmovisión indígena, el término *pachakutik* hace referencia a largos ciclos históricos que una vez agotados, fuerzan a las comunidades indígenas a iniciar una nueva fase de organización general de sus comunidades. El último se abrió con la conquista española de América. El neoliberalismo dominante en las últimas décadas ha obligado a los pueblos indígenas a impulsar otro nuevo ciclo: “Venimos en nombre de todas las vidas de la selva, para terminar con esta guerra de siglos” fue el mensaje filosófico y político que se pronunció en la *caminata* de los quichua de Pastaza en 1992 para plantear al gobierno de Rodrigo Borja el

En un primer paso, tras un largo proceso de convergencia en 1986 se crea la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) para representar *la voz indígena en el mundo moderno* y para presionar por el *fin de las discriminaciones legales y las estructuras políticas segregacionistas que han configurado un Estado excluyente*. Su intensa movilización tiene forma de *levantamientos* -marchas, con cortes de carretera y ocupaciones- y su incidencia es nacional (1990, 1994, 1996, 2000). La participación empieza a ir más allá de las demandas puntuales de reconocimiento material y cultural para empezar a discutir un modelo de desarrollo que excluye a las comunidades indígenas⁷.

No obstante, la CONAIE apostó por la participación electoral ya en 1995 con la creación del *Movimiento por la Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP)*, con quien consiguen en 1996 sus primeros diputados⁸. Tras la puesta en marcha de un duro paquete económico, el levantamiento de

reconocimiento de los territorios históricamente ocupados. Ver www.pachakutik.org.ec y www.conaie.org

⁷ Luis Macas, presidente de la CONAIE, denunciaba en 1993: "No es accidental que la mayoría de los últimos recursos naturales estén en territorios indígenas. Después de destruir su medioambiente, los blancos vienen a tomar los últimos territorios que nos quedan, los que hemos protegido" (referencia web).

⁸ Esta iniciativa partidaria se consolida gracias al trabajo conjunto de coordinadoras indígenas, sindicatos petroleros, movimientos vecinales y ecologistas y de organizaciones campesinas que habían impulsado a lo largo de la última década la extensión del seguro social a su categoría a través de los comités locales Pro Mejora. Se asume como un movimiento político al servicio de los movimientos sociales, que se aleja conscientemente de la política instrumental y de las componendas con los partidos tradicionales de derecha e izquierda. Busca generar *un proyecto nacional sobre la transversalidad de la identidad cultural indígena y la agenda de los movimientos sociales*. Se pueden destacar de su programa electoral los objetivos de economía social y desarrollo sostenible construido sobre la cultura de las comunidades indígenas y también el no pago de la deuda externa, la oposición al ALCA y al Plan Colombia, entre otras cuestiones presentes en las campañas en red internacionales.

2000 llega a alcanzar el palacio presidencial en la capital, consolidando su alianza hoy gobernante (con el Partido Sociedad Patriótica cuyo actual presidente Lucio Gutiérrez, era entonces responsable militar apartado de su cargo al negarse a reprimir el movimiento).

Como se verá más adelante, también el trabajo en red de los movimientos sociales en el campo de la economía también se diversifica y complejiza en los años noventa, dando cabida a lecturas culturales sobre las diversas iniciativas de autogestión, de economía solidaria y cooperativa. Un amplio repertorio de experiencias llegan a nuevas formas de “concebir y organizar la vida económica que implican reformas radicales dentro del capitalismo, basadas en principios no capitalistas que apuntan incluso hacia una transformación gradual de la economía basada en formas de producción, intercambio y consumo no capitalistas” en la medida en que incomodan su reproducción y hegemonía (Santos y Rodríguez 2002: 26).

3) La lógica ambivalente del tercer sector

La globalización capitalista, con la aceleración de los procesos de transnacionalización productiva y financiera, ha rebasado las fronteras de gobernabilidad del estado nación, desestructurando con la nueva dinámica de alta competitividad internacional la soberanía económica y condicionando la política. En esta coyuntura se fuerza un amplio proceso de reacomodo de las esferas estatal y mercantil transformando los mecanismos de regulación que cada sociedad había implementado para mantener un sentido de integración en la comunidad política. *Lo social* pasa a estar obligado a reposicionarse, a recomponer y reconectar los espacios de participación y canales de acceso a las arenas de representación y gestión político-administrativas.

Las dinámicas emergentes de este espacio de lo social redescubren un espacio político intermedio, un nivel

mesopolítico donde discurren las articulaciones micro-macro de la política. Es el campo del *tercer sector*⁹. Un concepto polémico, cuya nominación ordinal sirve para enfatizar en la tríada el *principio de autonomía asociativa*, que ordena y articula los vectores normativos que se originan en este campo: ayuda mutua, cooperación, solidaridad, confianza y educación para formas de producción, de consumo y en definitiva de vida alternativa. (Santos, 1999:60)¹⁰.

El concepto del tercer sector no ha alcanzado entre los analistas un consenso sobre su definición, ni sobre las formas de relación y el tipo de organizaciones que en él se incluyen: desde concepciones que lo reducen al grado de asociacionismo civil oficialmente registrado, hasta autores latinoamericanos que incorporan en el “mundo de la informalidad” incluso redes de medicina tradicional y magia blanca” (Fernández, 1994; Jerez y Revilla, 1997)¹¹.

⁹ Su definición negativa –ni lucrativo, ni gubernamental- tiende a confundir un planteamiento normativo de autonomía muy lejos de ser real en un espacio totalmente cruzado por las tensiones procedentes del primer (estatal) y segundo sector (mercantil). Donati (1997) desarrolla una sugerente perspectiva sistémica que entiende el tercer sector como producto de una diferenciación societaria en condiciones de creciente complejidad social cuya necesaria autonomía pasa por una comprensión estratégica de su papel, que es necesariamente político. Parece oportuno plantear que este espacio intermedio ha sido abordado en las últimas décadas, por la teoría de la sociedad civil (Cohen y Arato, 1992; Barber, 2000), desde el redescubrimiento del capital social (Putman, 1993) así como está presente en el debate sobre comunitarismo que ha dominado una parte muy considerable de la filosofía política en la última década.

¹⁰ Se puede decir que este tercer elemento también cuestiona el cierre sobre categorías dicotómicas impuestas en el “código simbólico” de la modernidad (individuo vs. colectivo; público vs. privado; estado vs. mercado; representación vs. participación, consenso vs. conflicto) (Donati, 1992 y 1997; Giner y Sarasa, 1997; Santos, 1999).

¹¹ Algunos autores han asumido como referencia la Clasificación Internacional de Organizaciones No Lucrativas (ICNPO), cuyas categorías recogen hasta doce campos de iniciativas no lucrativas que van desde el campo sindical hasta el patronazgo cultural, pasando por el ocio y los deportes. (Fernández, 1994; Ruiz de Olabúenaga, 2000)

En relación a la argumentación desarrollada interesa entender estas iniciativas desde el importante incremento vivido en las dos últimas décadas. Lejos de estar en el marco de los principios autonomistas que normativamente orientan este sector, estas entidades se han expandido en una coyuntura histórica marcada por la retirada del Estado, por lo que su discurrir sufre tensiones debido a su alta dependencia financiera, la laxitud de la normativa legal que las regula, la fragmentación del tejido social sobre el que actúan y la alta condicionalidad comunicativa que tienen en la esfera mediática.

Su naturaleza transformadora se expresa, pues, en la eventual elección de formas de actuación más o menos pasivas/adaptativas, o más o menos activas/estratégicas de estas redes pluralistas no jerarquizadas, formadas por decisiones de múltiples sectores sociales que convergen para incidir en las políticas públicas, que, a su vez conllevan formas de relación muy distintas respecto a los movimientos sociales, al Estado y al mercado¹². En última instancia, pueden jugar un papel facilitador u obstaculizador respecto a la construcción de ciudadanía según gestionen sus recursos “*apolíticamente*” para fines asistenciales –que se aproximan al pietismo caritativo- o incidan en la politización de la cuestión social.

En América Latina, la situación varía enormemente de un contexto nacional a otro¹³. Desde una perspectiva histórica, el desarrollo estratégico del sector está condicionado por el entramado de relaciones socio-estatales sobre el que descansan las políticas sociales (clientelismos) y la posición mantenida por

¹² Esta definición de redes del tercer sector es de Chalmers, citado en Reilly (1998). Son numerosas las polémicas en torno al ambiguo papel de las ONG en la crisis del Estado de Bienestar (Jerez, 1997; Ibarra, 1999; Revilla 2001) .

¹³ Las distintas pautas administrativas de registro y clasificación de entidades dificulta la elaboración de análisis comparativos; por otra parte, en la mayoría de los casos nacionales los expertos reclaman la necesidad de un mejoramiento legislativo del marco que regula el sector. Desde una perspectiva sociopolítica puede verse el trabajo comparado compilado por Reilly (1994); desde una legal-jurídica, el dirigido por Piñar Mañas (2001).

las jerarquías de la Iglesia Católica en las últimas décadas – particularmente durante las dictaduras-, marcando la diferencia de su orientación ideológica en tanto espacio de construcción de ciudadanía (Krischke y Mainwaring, 1986)¹⁴.

En el caso de Brasil, Doimo (1995: 153-161) destaca la imbricación del entramado de ONG con los movimientos populares, donde su progresiva especialización y diversificación institucional no ha significado su burocratización y despolitización, sino que ha logrado canalizarse para potenciar su implicación institucional en gobiernos municipales de corte progresista. Por el contrario, en México esta maduración política se presenta más lenta, tanto por la propia fragmentación y cooptación de los tejidos asociativos como por insuficiencias del marco jurídico. Existe la tendencia entre una parte significativa de estas entidades a desarrollar de manera ambigua su papel de intermediación, con un discurso autonomista, mistificador de la sociedad civil y refractario de lo estatal-partidario, sin capacidad de definir adecuadamente cursos de acción dirigidos a articular la participación democratizadora y la transformación institucional (Moreno, 1996; Gordon, 1997).

Sin embargo, más allá de las distintas realidades que presenta el tercer sector en los distintos contextos nacionales, la mayoría de los analistas valoran muy positivamente la evolución de las discusiones y aportaciones de este entramado en las últimas décadas. Abordadas como parte de una crisis de representación e intermediación que viven otros actores colectivos principales (partidos y sindicatos), se insiste en la necesidad de proyectar políticamente sobre todo la producción de

¹⁴ Obviamente hay posicionamientos críticos que, desde posiciones marxistas ortodoxas, consideran la funcionalidad del trabajo de las ONG a la hegemonía neoliberal en tanto promotoras de la “responsabilidad privada” en un contexto de retirada del Estado. Por ejemplo, el artículo “Las dos caras de las ONG” de James Petras (La Jornada (8/8/2000, México), ampliamente difundido en los *sites* y listas de distribución del tercer sector, alerta sobre su papel de *apagafuegos*. Si bien abrió polémica, fue un acicate para la reflexión autocrítica.

bienes y servicios de consumo colectivo y de control ciudadano de *lo público no estatal en la reforma del Estado* (Bresser Pereira y Cunill Grau, 1998; Cunill, 1991). Como se aborda en el siguiente apartado, el ámbito local es el espacio de desarrollo natural de estas dinámicas, y la innovación institucional materializada en el *presupuesto participativo* es una referencia de trabajo para este tipo de redes, incluso fuera de América Latina.

Desde la postura adoptada para la presentación de estos entramados participativos, es importante rescatar las aportaciones de las redes del tercer sector en el campo económico, promoviendo iniciativas de cooperativismo¹⁵, el desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo (Santos y Rodrigues, 2002). En mayor o menor medida, critican la racionalidad económica cerrada que orientó las políticas de desarrollo dominantes. Contra el exclusivo criterio del crecimiento económico, las dos primeras plantean imponerle límites y subordinarlo a otros imperativos no económicos, mientras que las alternativas de desarrollo buscan un nuevo paradigma rescatando y actualizando conocimientos existentes en la diversidad cultural ignorada por la modernidad capitalista.

Todas privilegian la escala local tanto como objeto de reflexión como de acción. Promueven fórmulas solidarias y cooperativas que garanticen la autonomía frente al estado, al mismo tiempo que afirman su voluntad tanto de superar la separación entre capital y trabajo como de satisfacer necesidades básicas y construir nuevos estilos de consumo¹⁶. Siguiendo a

¹⁵ En la reunión mantenida entre el gobernador del Estado de Piauí, el petista Wellington Dias y el representante de la Confederación Alemana de Cooperativas, Ehlert Christansen, se declaraba la voluntad de fortalecer el sector, sobre todo el ámbito crediticio. El alemán se mostraba optimista con la posibilidad de que el cooperativismo ayudase a reducir desigualdades en el marco de unas políticas sensibles hacia la problemática de la equidad, donde el Programa *Fome Zero* sentaba las bases de un buen comienzo (Folha de Sao Paulo, 12/03/2003).

¹⁶ La reflexión sobre el desarrollo alternativo a partir de la *informalidad* que crece en la región ha sido impulsada por la fundación sueca Dag

Santos y Rodríguez (2002: 48-51), se pueden plantear seis líneas fundamentales de articulación de estas iniciativas:

- 1) Formas asociativas de producción convencionales para acceder a bienes y servicios básicos (p.e cooperativas de trabajadores, asociaciones de vecinos con iniciativas autogestionadas)
- 2) Formas de *desarrollo sostenible* impulsadas en asociación con el movimiento ecologista internacional desde mediados de los años ochenta, que en los años dos mil cuestiona la política de privatización de recursos y servicios esenciales (agua, patentes genéticas, recursos energéticos, etc).
- 3) Formas de participación y organización de las mujeres en el desarrollo (donde si incardina la lucha por el reconocimiento oficial del trabajo femenino “invisible” como factor de desarrollo económico)
- 4) Apoyo económico a las clases populares en nuevos servicios financieros de pequeña escala (banca ética y microcréditos dirigidos a familias para iniciar o sustentar actividades productivas)¹⁷
- 5) Movimientos sociales rurales y urbanos que propugnan la acción directa, legal o ilegal, para conseguir el acceso de las clases subalternas a recursos como la tierra y la vivienda, para impulsar actividades productivas.

Hammar skjold desde mediados de los años setenta. En las alternativas al desarrollo la consolidación del ecofeminismo como línea de reflexión en los años noventa ha sido clave para adoptar un enfoque que de prioridad a los medios básicos de subsistencia y que esté centrado en mujeres y niños.

¹⁷ La perspectiva política que oriente este tipo de iniciativas es clave para entender su potencialidad emancipatoria en términos de construcción de ciudadanía, dado que también pueden ser interpretada e clave neoliberal, como lo hace el peruano Hernando de Soto en “El Otro Sendero” (1987). Una obra que además de estar prologada por Vargas Llosa llega a ser recomendada por Ronald Reagan, como apunta Cueva en su detenida crítica (1988).

6) Algunas redes del movimiento transnacional que realizan la crítica a la globalización apoyan un retorno a lo local desarrollando estrategias de ahorro, producción y consumo alternativos, incluso llegando a potenciar mecanismos de medición del valor del trabajo (no monetarios) fundados en el principio de reciprocidad.

En el contexto de crisis estructural y aumento de la desigualdad y marginación social, estas iniciativas sociales han ganado visibilidad y legitimidad, llamando la atención de ONG, gobiernos e incluso de organismos multilaterales. La crisis industrial y el cierre de empresas ha motivado a trabajadores despedidos, desocupados y entornos sociales locales a promover iniciativas de autogestión. El éxito logrado radica no sólo en el esfuerzo dedicado y en los beneficios postergados por parte de los trabajadores implicados, sino también en la recuperación del sentido del trabajo, antes alienado, que hace posible aumentar la productividad –por reducción de pérdidas y desperdicios-, y orientar la innovación a través de la relación solidaria en red con otras experiencias alternativas (Singer, 2002)¹⁸.

Un claro ejemplo de estas tendencias está en la evolución del trabajo de Cáritas Brasil en estas redes de iniciativas autogestionadas, pasando en menos de dos décadas de un enfoque asistencial al promocional, y de éste al de *solidaridad libertadora*. Desde esta perspectiva se desarrolla una crítica al capitalismo que en términos prácticos plantea que “con

¹⁸ En Argentina, con la crisis bancaria del finales del 2001 y el consiguiente cierre industrial, se han producido ocupaciones de fábricas que han contado con el apoyo de sectores sindicales críticos, de las redes movilizadas de asambleas, de colectivos *piqueteros* de desocupados así como de ciertos sectores de la opinión pública. El desalojo de la emblemática Bruckman en la víspera electoral tras más de un año de funcionamiento deja abierta la posibilidad un proceso de interlocución conflictivo con el nuevo gobierno (en <http://www.lavaca.org/notas/nota248.shtml> se iniciaba de mano de un anónimo afín al movimiento social un registro de fábricas ocupadas, que en mayo del 2003 prometía mantenerlo actualizado como contribución al debate).

organización y apoyo el trabajador puede superar la miseria”, apoyando esta entidad de la jerarquía católica miles de Proyectos Alternativos Comunitarios (PACs) en redes alternativas –como pueden ser los campamentos del *Movimento Sem Terra*–.

Siguiendo a Singer (2002), la campaña *Acción de la Ciudadanía contra el hambre, la miseria y por la vida* de 1994 promovió en Brasil un importante desarrollo de la economía solidaria, consiguiendo la implicación de numerosas entidades de la sociedad civil. Uno de las más interesantes es el *proyecto de incubadoras de cooperativas* potenciada desde algunos núcleos universitarios –ya en 1998 como programa nacional –para prestar asesoría permanente a estos *emprendimientos* solidarios, divulgar los principios del cooperativismo entre grupos interesados, colaborar en la puesta en marcha de iniciativas de producción o de prestación de servicios, mejorar técnicas empleadas, legalizar cooperativas, buscar mercados y financiación, además de darles prioridad en la contratación de las Universidades. La Central Unica dos Trabalhadores (CUT), a pesar de sus tensiones internas ante la disparidad del sentido transformador de estas iniciativas, impulsa el *Proyecto de Desarrollo Solidario* a nivel nacional desde 1998.

En relación a las experiencias autogestionarias, así como a finales de los años ochenta la experiencia de referencia en América Latina era Villa El Salvador en Lima, a finales de los años noventa es el *Movimento Sem Terra* el ejemplo más ilustrativo de la nueva complejidad a alcanzar con las múltiples articulaciones del trabajo en red. Su estrategia de ocupación de tierras con grupos familiares organizados ha generado una importante red de organizaciones para el desarrollo de sus asentamientos como para ser considerado uno de los movimientos sociales de desarrollo más intenso e innovador de las últimas décadas. Con una *organización social de masas* –en los términos de su propia definición– que pasa de contar con 80 delegados representando a 13 estados en el I Encuentro Nacional en 1984 a 11.000 delegados de 24 Estados en su IV Congreso Nacional celebrado en 2000 –con 29 delegados de 22

organizaciones campesinas extranjeras y 110 representantes del exterior de ONG o comités de solidaridad (Martins, 2002).

Ha pasado de tener una centena de campamentos en 1990 a contar con cerca de 600 en el 2000, habiendo logrado tener 250.000 familias asentadas y 70.000 acampadas en un Brasil que tiene 4,5 millones de familias sin tierra. En los asentamientos y campamentos han creado una organización comunitaria integral donde la producción es establecida junto a servicios de educación, salud y cultura. Sus 81 cooperativas y sus 45 unidades agroindustriales han hecho, entre otras cosas, descender las tasas de mortalidad infantil de forma drástica en sus asentamientos (Caldart, 2000)¹⁹.

Su intenso trabajo político ha mantenido la cuestión de la reforma agraria en la agenda política, creando un clima de opinión favorable que ha forzado un importante progreso en el programa nacional de formación de nuevos asentamientos, al mismo tiempo que ha deslegitimado ante la opinión pública la posición privilegiada de los latifundistas frente al Estado. A nivel local, la presión organizada desde los campamentos ha dinamizado la vida municipal hasta ese momento en manos de los latifundistas; a nivel global, este movimiento es uno de los pilares fundamentales de la red transnacional *Vía Campesina*, que pone en contacto a agricultores tanto del primer como del tercer mundo para fijar posiciones y campañas a favor de la reforma agraria y la soberanía alimentaria y contra la política comercial

¹⁹ Algunos otros datos pueden ilustrar la magnitud de esta *sociedad red* (Martins, 2002): 1.800 escuelas de enseñanza primaria completa con 3.800 educadores y 150.000 alumnos; 1.200 educadores de adultos con 25.000 alumnos; amén de iniciativas compartidas en la enseñanza media en áreas de gestión de cooperativas, formación de educadores y técnicos, con convenios con 25 universidades públicas y privadas, decenas de estudiantes de medicina y de otros estudios superiores cursando en Cuba y Brasil. Al mismo tiempo cuentan con iniciativas en el campo de la prensa escrita y en la comunicación radiofónica, con reciente distribución mensual de contenidos en propias radios, en las católicas y universitarias afines, e, incluso, en algunas comerciales.

de las multinacionales, los productos transgénicos, la violencia policial y paramilitar contra los campesinos.

No obstante, más allá de su evidente éxito, existen críticas internas al propio tercer sector respecto a los posibles excesos del aislamiento comunitarista de estas respuestas a la exclusión social, que en ocasiones llegan a albergar la ilusión de poder desconectarse de la sociedad hegemónica. Esta cuestión será abordada en las conclusiones.

4) Yendo hacia abajo: la participación en el gobierno local

En un contexto de ajuste macro-estructural, la reforma del estado que se pone en marcha en América Latina en los años setenta y ochenta, adopta como criterio fundamental de racionalización la descentralización político-administrativa. Se presenta útil no sólo para contrarrestar la crisis económica y fiscal sino para fortalecer la redemocratización. El consenso en torno a la descentralización es amplio, ya que se apoya tanto en partidarios del *estado mínimo* y elites regionales que temen por sus bases de poder en un contexto económico fluido, como en todos aquellos que la consideran como un requisito para toda experimentación en política social y participativa (Borja, Calderón y otros, 1989; Nunes, 1991).

En el marco de una redemocratización que transita con distintos ritmos en los diferentes países, según características institucionales y comportamientos de los actores sociopolíticos (partidos, sindicatos y movimientos), en este primer momento descentralizador se generan escenarios político-institucionales que facilitan o dificultan el desarrollo participativo. La transferencia de potestades legislativas y responsabilidades en políticas pública y social, sin garantizar la transferencia presupuestaria y mecanismos de autonomía financiera, limitan la capacidad de innovar en este campo.

En el caso chileno, la *desconcentración autoritaria* se apoya en una modernización de tipo gerencial al tiempo que

mantiene bloqueados los canales participativos (Rosenfeld, Vergara e Icaza, 1991). En México las diferencias en las legislaciones regionales que regulan su respectivo ámbito local, generan dinámicas diversificadas de participación (Assad y Ziccardi, 1989). La privatización de servicios públicos (agua, alcantarillado, recogida de basuras, etc.) en contextos políticamente desarticulados en lo que respecta a la organización de base, como es el caso de Bolivia, suscita demandas fragmentadas e iniciativas de autogestión sin capacidad de incidir en la reforma municipal (Vargas, 1991). En Venezuela, las *ofertas participativas reguladas* limitan la autonomía requerida para conseguir mayor calado en las reformas (Peñalva, 1989).

Los problemas de adecuación entre municipios y realidad étnico-lingüística se evidencian en países como Bolivia, Ecuador o Guatemala. La progresiva organización de los movimientos indígenas ayuda a conformar *la protesta y la propuesta* para este ámbito clave en el reconocimiento de derechos colectivos y culturales de las comunidades. Se empieza a cuestionar una noción de municipio con referencias urbanas que disemina la realidad rural de las comunidades, dejando fuera del ámbito local a importantes contingentes de población (Molina, 2001; Pérez Molina, 2001).

En la década del noventa, el espacio del gobierno local adquiere mayor protagonismo político, por el crecimiento demográfico y la movilidad poblacional en las ciudades, pero sobre todo por el aumento de importancia de su gestión política-económica en el marco de una creciente competitividad territorial potenciada por la globalización. Las ciudades pasan a promover una reconversión territorial en lógica de red regional intentando transformar y reconectar tejidos urbanos y productivos. La participación se convierte en un componente estratégico para salvaguardar y motivar el desarrollo social en un contexto municipal crecientemente condicionado por la necesidad de capital y la posibilidad de rentabilidad especulativa (Fischer, 1996; Villasante, 1998).

La posibilidad de incidir en este contexto pasa por la construcción de un proyecto político con expresión partidaria; los sectores populares movilizados se encuentran con el reto de promover la participación como proyecto de gestión estatal²⁰. La formación del Frente Amplio en Uruguay, el Movimiento por la Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País en Ecuador, el movimiento V República en Venezuela o la emergencia del Partido dos Trabalhadores en Brasil ha significado un reajuste de los parámetros de disputa político-ideológica en sus respectivos sistemas partidarios²¹. Para todos estos proyectos el ámbito local ha sido un campo fundamental de experimentación.

²⁰ Rubinstein (1994) plantea que la emergencia del proyecto político-partidario depende del comportamiento de los actores sociales en su respuesta a la coyuntura económica, del diagrama de fuerzas y alianzas sociales existentes en la comunidad y de las formas concretas de relación de poder o de dominación política.

²¹ En la medida en que la *administración local petista* es referencia en este apartado, parece pertinente introducir nuevamente una mínima perspectiva histórica sobre el caso. El Partido dos Trabalhadores surge de la amplia interacción de los movimientos sociales durante el proceso huelguístico de finales de los años setenta y tiene como epicentro las ciudades industriales en la periferia de Sao Paulo. A lo largo de la década se produce un proceso de hibridación entre las *matrices político-discursivas en crisis* (sindicatos corporativos cooptados durante el periodo autoritario, la iglesia católica amenazada por el impulso que ganan las evangelistas apoyadas desde EEUU y la izquierda marxista derrotada en su estrategia de revolución armada). En las comunidades de base de la iglesia, al ser de los pocos espacios de reunión no perseguidos por la dictadura, se funden prácticas y discursos críticos de la izquierda marxista con la perspectiva emancipadora de la teología de la liberación (que cuenta con el apoyo de las jerarquías a través de sus comisiones pastorales obrera, de la tierra, de derechos humanos), en el seno de un movimiento obrero en expansión (Sader, 1988). *Estos nuevos personajes entran en escena* con el apoyo de importantes sectores de clases medias presentes en el movimiento estudiantil, universitario y en los entornos católicos con la fuerza suficiente como para consolidar su perspectiva crítica en forma de proyecto político partidario, que lleva al sistema partidario de una fase de predominio de una política cooptativa que invalida la esfera pública a una fase político-ideológico donde empiezan a emerger los referentes de clase y las discusiones en torno al tipo de democracia (Reis, 1988; Keck, 1991; Sader y Silverstein, 1991).

La presencia de estos partidos en los ayuntamientos han propiciado una intensa dinámica de colaboración con el tercer sector, apoyando la creación de ONG e instancias de investigación y planificación dedicadas a promover la reflexión sobre la transformación participativa del ámbito local. El ejemplo más acabado está de nuevo en Brasil con la creación en 1990 del Foro Nacional de Participación Popular como espacio de intercambio y discusión entre ayuntamientos democráticos, movimientos sociales, ONG, entidades de la sociedad civil, parlamentarios e investigadores²².

Conforme sea la coyuntura y los marcos de relación institucional, las universidades desarrollan articulaciones más o menos profundas con estos nuevos espacios de la sociedad civil. Si bien la situación de crisis ha fomentado la “descentralización” de la investigación hacia centros privados capaces de conseguir recursos externos, dependiendo de la densidad del entramado de sociedad civil los sectores académicos críticos han podido participar con mayor autonomía para potenciar estos procesos de reflexión e intercambio entre grupos cada vez más amplios de la sociedad civil.

En estas redes que articulan el trabajo de expertos, profesionales de las ONG, activistas y pobladores se busca generar nuevas perspectivas sobre la participación elaborando metodologías para la planificación y la programación integral y construyendo nuevos índices, indicadores y *sociogramas* para evaluar la participación y el desempeño municipal, que persiguen la innovación en los sistemas integrados de información y evaluación de las políticas municipales. Su análisis busca desentrañar las potencialidades que encierran las dinámicas participativas de las nuevas iniciativas de descentralización de

²² El Foro fue impulsado por Instituto Cajamar, Instituto Polis, FASE e IBASE (VillasBoás y Telles, 1995). Por contraste, en México, el *Foro Nacional de Participación Social* presenta una perspectiva marcadamente institucional, en la medida en que está promovido desde la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Desarrollo Municipal, y se reunió en 10 foros regionales a lo largo el 2001 (FNPS, 2001).

servicios sanitarios y culturales, de cuidado de la infancia, los programas de guarderías autogestionadas, los proyectos agrícolas urbanos, portales informáticos de servicio al ciudadano con software libre, proyectos de reciclaje de banca ética y economía social (Faria y Souza, 1994; Salles y otros, 1995; Villasante, 1998; Fanchin y Chanlat, 1998).

El *presupuesto participativo* de Porto Alegre es la macroexperiencia más acabada desde el punto de vista de la innovación institucional. La industrialización tardía ha supuesto un alto grado de segregación urbana en esta ciudad de 1,3 millones de habitantes y 3 más en el área metropolitana, capital del Estado de Rio Grande do Sul²³. La entrada del PT en el gobierno en 1989 ha desarrollado gradualmente esta experiencia, que se extiende a lo largo del año en tres grandes ciclos:

En el primer ciclo se fijan las grandes prioridades territoriales y temáticas para la acción de gobierno en un proceso de participación extensiva en reuniones y asambleas barriales que terminan adoptando sus acuerdos en dos rondas de 16 asambleas plenarias de distrito y 5 plenarias temáticas (sanidad y asistencia social; educación, cultura y ocio; desarrollo económico y fiscalidad; transporte y circulación-; desarrollo urbano y medio ambiente). Esta fase se extiende entre marzo y julio y se desarrolla junto a las bases organizadas y en las asambleas de barrios²⁴.

²³ El presupuesto participativo se desarrolla en otras ciudades brasileñas -destacándose otra capital de Estado (Belo Horizonte, Minas Gerais)- y en la capital uruguaya de Montevideo (Giménez y otros, 2002). En España se ha convertido en una referencia para las izquierdas (socialdemócratas y comunistas), como se pone de manifiesto en su reciente aplicación en algunos ayuntamientos (Rubí, Cabezas de San Juan y Córdoba), en la investigación que están impulsando la Universidad de Barcelona y las traducciones sobre el tema al castellano (Genro y Souza, 1997/2000; Gomá y Rebollo, 2001; Merino, 2003; Gret y Sintomer, 2003; Genro, 2003)

²⁴ En esta primera fase pueden participar tanto personas individuales como representantes de asociaciones y entidades para: 1) evaluar y realizar recomendaciones al desarrollo del Plan de Inversiones acordado el año anterior, 2) debatir y aprobar las *reglas del juego* (metodologías de

En el segundo ciclo se incorporan todas estas demandas al anteproyecto del presupuesto aprobado por el legislativo municipal a lo largo de un proceso técnico-político donde las instancias de planificación trabajan lideradas por el Consejo del Presupuesto Participativo (CPP). Después de recibir los participantes un curso formativo sobre técnicas de presupuestación municipal y tras una ronda de intercambio organizada por las instancias de planificación en la cual se incorporan las demandas institucionales de los distintos departamentos municipales, una primera matriz presupuestaria es aprobada preliminarmente por el CPP, el Gobierno Municipal y su Comisión de Hacienda, y definitivamente en la Cámara legislativa municipal. Esta fase se desarrolla entre los meses de julio y septiembre y lo hace principalmente en arenas político-institucionales.

La tercera etapa está centrada en la redacción final del Plan de Inversiones para la propuesta aprobada en la Cámara Municipal, tras haber realizado el análisis conjunto (entre el CPP, las instancias de planificación y las secretarías y departamentos municipales) sobre la adecuación técnica, legal y financiera de las demandas jerarquizadas por la población y los criterios de distribución de recursos entre las regiones²⁵. Esta fase,

diagnóstico, criterios de prioridad y asignación de recursos, etc) y 3) elegir los delegados del Foro en proporción al número de participantes en cada distrito y los miembros del Consejo del Presupuesto Participativo (está formado por 32 representantes de distritos, 10 de foros temáticos, 1 de la Federación de Asociaciones de Vecinos, 1 del Sindicato de Trabajadores Municipales y dos miembros del gobierno municipal sin derecho a voto). Los delegados coordinan y promueven las siguientes fases participativas en los barrios, introduciendo las orientaciones surgidas del Foro temático en los distintos momentos del proceso decisorio compartido entre el CPP y las instancias municipales) (Genro y Souza, 1997; Gret y Sintomer, 2003).

²⁵ Una vez definidas las prioridades de las distintas regiones, la distribución de las inversiones y recursos entre ellas se jerarquiza con la aplicación de unos criterios objetivos de evaluación que atribuye puntuaciones de 1 a 4 a: 1) la carencia de servicio o infraestructura urbana; 2) la población en áreas de carencia máxima en cada región; 3) la población total de la región; 4) la

fundamentalmente técnica, se desarrolla entre los meses de octubre y diciembre.

El proceso participativo tiene una estructura piramidal: en la base se encuentra la dinámica participativa barrial, que empieza a organizar en el nivel micro las demandas y aportaciones de asociaciones de vecinos y otras entidades, cuyos portavoces las llevan a las sesiones plenarias de distrito y/o temáticas. En éstas se elige a los delegados para el Foro en proporción a la participación habida en las plenarias y a los 42 miembros del Consejo del Presupuesto Participativo, que cierra la pirámide de la participación quedando representada la dinámica participativa habida en los barrios en el interior del proceso institucional de toma de decisiones.

En las distintas plenarias participan entre 100 y 2000 personas; mayoritariamente pertenecen a asociaciones de vecinos (60%) y en menor medida a grupos religiosos o culturales, comisiones barriales, etc. El perfil de los representantes en las distintas instancias es mayoritariamente el de capas populares y clases medias asalariadas, con una proporción bastante paritaria entre hombres y mujeres (60-55% hombres y 40-45% mujeres, predominando la gente joven (en torno al 55% son menores de 42 años, teniendo en torno a 15% de ellos entre 16 y 25 años) (Fedozzi, 1997). El nivel educativo mayoritario es de nivel primario completo; a pesar de la presencia masiva de clases populares, su nivel participación en los distintos procesos pone de manifiesto que el capital educativo sigue siendo un factor discriminante (Gret y Sintomer, 2003).

La resolución de la tensión de esta *nueva forma de decidir* entre los dos focos de poder democrático –representación electoral y participación directa- ha tenido sus fases conflictivas en la cámara legislativa (Fedozzi, 1997). No obstante, se puede considerar que tras más de una década de duración de la

prioridad atribuida por la región a los sectores de inversiones demandados por ella (Fedozzi, 1997).

experiencia, esta innovadora articulación institucional ha consolidado su legitimación, estableciendo una relación de complementariedad entre ambas dinámicas. Los concejales avalan el proceso participativo, mientras que consejeros y delegados populares asumen la capacidad decisoria final de la cámara municipal. Los legisladores renuncian al monopolio institucional en el proceso, abriendo una esfera para la participación activa en la planificación y en la orientación real del proceso decisorio (Giménez y otros, 2002).

Se activa una dinámica de participación política directa, que conlleva una nueva forma de institucionalidad de democracia directa (Benevides, 1991; Comparato, 1994; Fedozzi, 1997; Gret y Sintomer, 2003). Como plantea Genro (1997) es una experimentación altamente positiva para el poder local que apunta a *un nuevo modelo para dirigir el Estado y de crear un nuevo tipo de Estado*: “El proceso del presupuesto participativo hace una *crítica práctica de la libertad* meramente formal, mediante la cual el ciudadano vota y vuelve para la casa. A través del Presupuesto Participativo los ciudadanos pueden articular la lucha por sus derechos, combinando decisión individual (querer participar) con la participación colectiva (que genera decisiones públicas) (p.22)”.

La dinámica de participación abre una *esfera pública no estatal*, en la que se viabiliza la cogestión de la sociedad en la *cosa pública* y un nuevo mecanismo de control horizontal sobre el estado. También se puede concebir como un mecanismo neocorporativo, en el cual el proceso de participación-negociación se apoya en la máxima transparencia informativa, dado que la información es activamente socializada en las diversas fases del proceso. Esta capacidad participativa de construir el diálogo necesario para arrojar luz sobre la complejidad institucional de la *caja negra* donde se deciden las políticas públicas, sirve para limitar la presión de los grupos empresariales, así como las prácticas particularistas de los diputados (corrupción; clientelismo). Esta mayor densidad

institucional de la vida democrática contribuye a la despatrimonialización de la vida política local (Fedozzi, 1997).

Por su parte, no pueden perderse de vista sus implicaciones culturales, desde el punto de vista de construcción de ciudadanía. La elaboración compartida del presupuesto público entre la administración municipal y la comunidad establece *un contrato* entre gobierno y sociedad, que no necesariamente busca traducirse en *paz social*, sino que asume dinámicamente la existencia del conflicto social. Una *radicalización democrática de la democracia* que revaloriza la vida político-institucional incluso para *sectores basistas* ideológicamente refractarios del *formalismo* de la democracia representativa. En este sentido, como esfera pública está transformando los parámetros de implicación pública pasiva favorecidos por la cosmovisión liberal, que en el caso brasileño está reforzada por una cultura política modelada por el autoritarismo cooperativo.

En definitiva, la participación hace efectiva una *conciencia ciudadana con conocimiento de causa*, gracias a que permite contrastar los resultados concretos de su propia implicación en el proceso a través de la mejora de servicios y optimización de las inversiones. A lo largo del tiempo también es posible constatar una efectiva inversión de prioridades a favor de los sectores más desfavorecidos. A pesar de no ser las clases medias las mayores beneficiarias de este cambio, no les impide percibir que inversión de prioridades así como la mayor transparencia y el mejor control hacen la ciudad más habitable. No sin haber vivido tensiones institucionales y culturales, la dinámica de “buen gobierno” se va convirtiendo en un valor de seguridad para la comunidad en general.

La envergadura cultural de este reto de transformación institucional se deja sentir en las complejas coordenadas político-mediáticas de la llamada “sociedad de la información”. La dificultad de acceso del ámbito local a la esfera mediática modelada por los medios comerciales de ámbito nacional, que promueven valores individualistas y consumistas (social y

políticamente desresponsabilizadores) ha demostrado los riesgos electorales que corren los partidos que la intentan llevar a cabo. Con la información y los parámetros valóricos disponibles en estos canales convencionales, buena parte de la ciudadanía tiende a considerar más los costes que los beneficios de los esfuerzos de participación que exigen este tipo de iniciativas.

No obstante, en el caso más consolidado de Porto Alegre, se puede plantear que los movimientos sociales ponen en marcha un *nuevo principio ético-político* que redimensiona la idea de democrática en el seno de las distintas culturas políticas (Baierle, 2000). Incluso llega a escucharse su eco en los organismos que han sido hasta ahora bastiones del ‘pensamiento único’ (Gret y Sintomer, 2003:172)²⁶. El camino a recorrer es amplio, como lo pone de manifiesto el ex alcalde Tarso Genro, hoy ministro responsable de la Secretaría del Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. El intento es iniciar reformas postergadas y necesarias -como la de la seguridad social, la tributaria y la de mercado de trabajo-, buscando esta vez ya en el plano federal mecanismos participativos que amplíen el pacto neocorporativo más allá de la estricta participación tripartita capital-trabajo-estado de la fase keynesiana, incorporando representantes de otros sectores activos de la sociedad civil que amplíen tanto la perspectiva de resolución como su legitimación político-social.

²⁶ Los autores mencionan las buenas condiciones de las ayudas del propio Banco Mundial a Porto Alegre, y su utilización como referencia ejemplar para el tercer mundo, que de hecho es asumida en Brasil también por otros partidos. El Programa de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos ha seleccionado dentro de su planteamiento de “experiencia ejemplar” el Presupuesto participativo entre 1993-2000. Otras iniciativas participativas y de innovación institucional han sido premiadas por fundaciones e instituciones brasileñas y extranjeras en los diversos municipios petistas (ver www.pt.org.br).

5) Yendo hacia arriba: redes transnacionales y el foro social mundial

El crecimiento de la *sociedad civil internacional* se viene poniendo de manifiesto desde principios de los años ochenta. La masiva violación de derechos humanos y las tardías revoluciones centroamericanas desarrollan iniciativas de solidaridad tejidas entre instituciones y entidades del Norte y América Latina²⁷. Al mismo tiempo, el deterioro de la política social y del papel garantista del estado tras la *década perdida* de crecimiento económico aumenta las iniciativas de cooperación y de ayuda humanitaria: las ONG proliferan masivamente en los años 90 al aumentar la financiación para los programas de ayuda al tercer mundo. Sin embargo, la cooperación entre redes de solidaridad con identidad política cuestionan y advierten sobre estas nuevas tendencias, en las que prevalecen prácticas burocratizadas y poco sensibles a las dinámicas socioeconómicas y políticas en las que están implicados los movimientos de base presentes en las comunidades receptoras de ayuda, interfiriendo en su organización para garantizar el cambio social de manera endógena.

En 1992 coinciden dos celebraciones importantes para el desarrollo de estas redes entre Europa y América Latina. Por una parte, se conmemora el descubrimiento de América desplegando una importante actividad en el marco del V Centenario, iniciativa estratégica en la acción exterior para promocionar el liderazgo internacional de España. La respuesta a la propuesta oficial de *Encuentro entre dos Mundos* se da en la campaña *500 años de resistencia*, promovida por numerosas entidades españolas y

²⁷ El antecedente más remoto en este tipo de este estrategias de coordinación entre distintas entidades lo sitúan Fox y Brown (1998:5) en las críticas vertidas por las ONG de derechos humanos sobre el papel jugado por el BM en la desestabilización del gobierno de Allende en Chile a principios de la década del setenta. Según estos autores las iniciativas orientadas a promover reformas en el funcionamiento de estas entidades multilaterales las impulsan activistas ecologistas norteamericanos en 1983.

latinoamericanas que llega a reunirse en España (en Puerto Real, donde partían las réplicas de las carabelas de Colón).

Por otra parte, en este año las Naciones Unidas celebran la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Rio de Janeiro. El empuje de las entidades brasileñas ya se había constatado con la creación del *Foro de Sao Paulo* en 1990, sirviendo esta nueva red de partidos y movimientos de la izquierda latinoamericana para convocar la mayor *cumbre paralela* conocida hasta el momento.

Desde esta perspectiva histórica, no se puede dejar de señalar la progresiva consolidación del uso de Internet a lo largo de la década como un factor clave para aumentar exponencialmente la velocidad del intercambio de información y posibilitar la aparición de nuevos vínculos sociales en el ciberespacio (Finquelievich, 2000).

Durante este periodo las diversas ONG muestran comportamientos cada vez más divergentes en el entramado institucional de Naciones Unidas, particularmente en el programa del Banco Mundial. En un extremo están las que se pliegan a las estrategias de cooptación –limitándose a asumir los objetivos del proyecto y el marco discursivo diseñado por el donante-; en el otro, las que presentan un rechazo más o menos frontal a la creciente condicionalidad que pesa en esta nueva fase que se abre en la cooperación (Covey, 1998).

Entre estas últimas se crean coaliciones de ONG que reclaman una mayor transparencia en el funcionamiento de los organismos multilaterales. Uno de los principales efectos será que ellas mismas serán sometidas a un proceso de autocritica, que postula un mayor control de las ONG del Norte (donantes) por parte de las ONG del Sur. Lo que llega a cuestionar la propia intermediación de las ONG del Norte -muchas veces reducida casi exclusivamente a su dimensión financiera-, llevando a los donantes (gubernamentales y multilaterales) a potenciar la financiación directa de las ONG del Sur. Va emergiendo así una

reflexión de corte más estratégico en las ONG del Norte sobre su papel en la escena internacional²⁸.

La reforma en el funcionamiento de las instituciones multilaterales pasa a ser uno de los objetivos de la nueva estrategia de presión política sobre los gobiernos donantes y sus representantes en el BM, al tiempo que intentan incidir en la definición de las políticas de desarrollo de sus propios gobiernos. En el Sur, las ONG aumentan su coordinación con los movimientos de base, buscando mejorar tanto el desarrollo de sus proyectos específicos como su trabajo de presión política a nivel local junto a las comunidades receptoras de ayudas. Al coordinarse en campañas, esta doble presión ha conseguido variar gradualmente algunos objetivos de la cooperación, ha transformado mecanismos de trabajo y ha matizado recomendaciones de alto costo socioambiental. Y sobre todo, como se irá viendo, el cuestionamiento cada vez más explícito del aislamiento burocrático y las dinámicas oligárquicas de estas instituciones, refuerza las posiciones de los reformistas presentes en el interior de estos organismos como en los departamentos ministeriales nacionales (Fox y Brown, 1998).

En este sentido, *la brecha entre el discurso y la práctica de las organizaciones internacionales en el ámbito social y ambiental es políticamente contingente*. Su amplitud y profundidad depende del equilibrio relativo de poder entre los actores que obstaculizan y aquellos que promueven la implementación del paquete de reformas estructurales que dichos organismos requieren en la nueva coyuntura global (Covey

²⁸ La discusión en torno a la estrategia de participación y transparencia de las ONG afecta tanto a las propias organizaciones, como a sus trabajadores y a las colectividades junto a las que realizan sus proyectos, donde su reflexión estratégica busca superar el contexto de *condicionalidad* promovido por las instituciones donantes (Craig y Porter, 2000; Pearce, 2000). Por otra parte, es ilustrativa de esta tendencia la reciente reorganización de OXFAM internacional -que ha desplazado al terreno todos los equipos de proyectos, y deja en la sede central exclusivamente el personal dedicado a la sensibilización y presión políticas (Serrano Oñate, 2002).

1998:535). En esta coyuntura las ONG se ven compelidas a una *mayor reflexión* y una *menor acción* (Gordenker y Weiss, 1996).

La posibilidad de reformar el propio funcionamiento del entramado ONU parece depender de la capacidad de diálogo y presión que puedan construir entre los diversos interlocutores que se posicionan a favor de la *reforma* en el ámbito internacional. Las coaliciones entre actores sociales y estatales, atravesando redes nacionales y transnacionales, buscan articularse en tres niveles de actuación:

- 1) nivel internacional: las iniciativas buscan el apoyo y la legitimación crítica de los elementos reformistas existentes dentro de las agencias internacionales (una muestra indicativa es el protagonismo de las críticas del premio nobel 2001 y vicedirector del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, a las medidas impuestas por el FMI y el BM en las últimas crisis asiática y argentina, presentes en buena parte de los *sites* de las redes de los movimientos por la justicia global)
- 2) nivel nacional en el ámbito estatal: las coaliciones reformistas buscan apoyarse en los actores políticos y burocráticos que abogan por un mayor control y fiscalización de los fondos públicos de cooperación, intentan sensibilizarlos para que apoyen las estructuras de oportunidad favorable para la reforma que puedan darse en los entramados internacionales (en este sentido es ilustrativo el apoyo de juristas y judicaturas progresistas de distintos países a la creación del Tribunal Penal Internacional reclamado desde la sociedad civil o los posicionamientos a favor del cumplimiento de recomendaciones de informes de organismos multilaterales por parte de funcionarios estatales en el campo de la cooperación).
- 3) nivel nacional en el ámbito de sociedad civil: estas coaliciones tratan de consolidar un tipo de participación estructurada y solventemente informada entre miembros de las organizaciones sociales que diversifican sus ámbitos de trabajo, prestando particular atención a las labores de

investigación y sensibilización de la sociedad civil y de la opinión pública (por ejemplo, en España la promoción de la *consulta social sobre la deuda externa* además de formar la red que recoge 1.080.000 respuestas durante las elecciones de marzo de 2000, conlleva la organización de talleres de formación y convenios con universidades para poner en marcha *observatorios de la deuda* y cursos de capacitación especializados (Jerez, 2001).

En definitiva, el impacto que puedan tener los fondos de cooperación sobre la crisis de desarrollo depende tanto de la intención e intereses que dominen entre los gestores de estos organismos económicos internacionales como de la capacidad participativa para avanzar en la democratización de los Estados y en la movilización de los subrepresentados (Corvey, 1998).

Respecto a la primera cuestión, se puede constatar la reemergencia de una perspectiva crítica en el entramado de Naciones Unidas con la aparición del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990²⁹. Las discusiones en torno a la elaboración del índice de desarrollo humano ya indicaban una preocupación por los instrumentos disponibles para evaluar e interpretar la crisis desde un ángulo que fuese más allá de los indicadores macroeconómicos, que hasta el momento informaban el sistema de ayudas internacionales³⁰. Además, a lo largo de la década, en

²⁹ En cierto sentido, como se ilustra más adelante con las propuestas presentes en el Foro Social Mundial, parece recuperarse la perspectiva del *deber ser en el ámbito internacional* que ya había surgido en la década del setenta con las demandas de un *nuevo orden económico internacional* (NOEI) y un *nuevo orden mundial de la comunicación y la información* (NOMIC) propuestos por los *países no alineados* en las tres rondas de la UNCTAD (Ginebra, 1964; Nueva Delhi, 1968; Santiago de Chile, 1972); la Comisión Brandt estipulando en 1970 el 0'7% del PIB como ayuda a materializar antes de 1985 y con la publicación del informe McBride en la UNESCO en 1980.

³⁰ La elaboración del propio índice de desarrollo humano como instrumento para dar cuenta de *libertades sustanciales* vive tensiones al intentar incluir indicadores de las libertades políticas y cívicas, pasando por varias etapas de

sus informes anuales se ha argumentado a favor de la participación y del *apoderamiento* de los sectores subalternos y se han promovido propuestas de reforma de los mecanismos de cooperación³¹.

En lo que se refiere a la “movilización de los subrepresentados”, la década del noventa ha sido fundamental para la innovación participativa que busca presionar políticamente sobre estos espacios institucionales transnacionalizados, hasta el momento ignorados por lejanos e inasibles en la perspectiva “local” en la que se desarrollan los sujetos sociales dentro de las fronteras del Estado-nación. Como se detalla más adelante al comentar la dinámica del Foro Social Mundial, en estas movilizaciones se han empezado a hibridar los marcos discursivos críticos de distintas procedencias ideológicas, demostrando que la crisis de desarrollo no es una cuestión exclusiva del tercer mundo. Se recupera la crítica al capitalismo como modelo de producción y de consumo medioambientalmente insostenible en los actuales parámetros y se construye una nueva propuesta democrática participativa para generar un nuevo modelo de desarrollo centrado en las necesidades humanas.

discusión sin llegar todavía a incorporarlas pese a las diversas propuestas de múltiples redes de organizaciones (Eizaguirre y Alberdi, 2001).

³¹ Se plantea la necesidad de un *nuevo pacto global por la igualdad*, lanzando en 1992 por la campaña *Dividendo de paz* (pautando la reducción del gasto en defensa y su reinversión en áreas sociales estratégicas); en 1993 se enfatiza el papel de la participación y la sociedad civil en el desarrollo, considerando las ONG y las organizaciones populares como órganos legítimos para la presión política y el desarrollo de labores de *advocacy* frente a gobiernos y empresas; ante la Cumbre Social de Copenhague de 1995, en el informe de 1994 se plantea la propuesta 20:20 y la recuperación de la propuesta de la llamada Tasa Tobin, reclamada posteriormente por ATTAC. En el informe de 2000, se argumenta a favor de estrategias de presión sobre las empresas como el boicot de los consumidores y las políticas de etiquetado y se saludan las movilizaciones de Seattle como un intento de ampliar el debate que permanece entre bambalinas a pesar de su importancia para el gran público (Jerez, 2001).

Ya se apuntó cómo se inició la *propuesta* de manera gradual y sostenida en el ámbito de las ONG, en la dinámica de *cumbres paralelas* que se mantienen desde la Cumbre del Medioambiente y Desarrollo en Rio de Janeiro en 1992. En las celebradas en años posteriores -derechos humanos (Ginebra, 1993); población (El Cairo, 1994); mujer (Pekín, 1995); Desarrollo social (Copenhague, 1995); Habitat y Desarrollo urbano (Estambul, 1996)– ONG, centros de investigación y movimientos de base impulsan la construcción de redes y buscan combinar de manera más integrada sus trabajos de organización, formación, investigación, presión política y sensibilización en campañas internacionales.

Surgen a lo largo de estos años redes como Via Campesina (1992), la red crítica hacia el FMI y el BM *50 años bastan* (1994), Marcha Mundial de las Mujeres (1996), Jubileo 2000 (1996), Social Watch (1996), ATTAC (1998), Acción Global de los Pueblos (1998), Jubileo Sur (1999), Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica (2000), además de otros consorcios de ONG para poner en marcha campañas específicas. Con importantes nodos en América Latina, estas redes promueven marchas y campañas de ámbito mundial contra el trabajo infantil, de mujeres contra de la violencia y la pobreza, la “Campaña Global por la Reforma Agraria”, “El mundo no está en venta. Soberanía alimentaria y comercio internacional” o “Deuda Externa ¿Deuda Eterna?”, además de otras dedicadas a la prohibición de fabricación de minas antipersonas, al control de ventas de armas y a la supresión del uso de patentes médicas en los países pobres (Díaz Salazar, 2002; Atienza, 2002).

Paulatinamente, a lo largo de este periodo, se transita desde la exclusiva *lógica de la propuesta* de las *cumbres paralelas* hacia su combinación con la *lógica de la protesta* en las *contracumbres*. Junto a los foros donde estos colectivos publicitaban los diagnósticos y pronósticos elaborados en sus investigaciones independientes, discutían sus propuestas de reforma y acordaban nuevas campañas de concienciación, empieza a emerger una dinámica de movilización que busca

darle visibilidad al conflicto que se percibe soterrado en estos espacios que orientan la política de la globalización neoliberal.

En esta nueva visibilidad de las virtudes de la participación de la sociedad civil no puede dejar de apuntarse la incidencia que tuvo la revuelta *neozapatista* en Chiapas a comienzos de 1994. Su nueva retórica ha sido ampliamente referenciada en las diversas redes de resistencia global gracias al desafío que, para la apatía y la desilusión aparecidas tras la declaración del *fin de la historia*, significaron los dos “Encuentros Mundiales por la Humanidad y contra el Neoliberalismo” (1996 y 1997)³².

“Visibilizar el conflicto en las coordenadas de la llamada *sociedad de la información*” –las necesidades que lo activan, los discursos y las prácticas que mantienen su sentido social para la construcción de ciudadanía-. Con este objetivo la construcción de la protesta pasa a ser un objetivo político en sí mismo, tomando una fuerza considerable las estrategias de determinadas redes que se plantean recuperar los espacios públicos y mediáticos con acciones más o menos espectaculares de desobediencia civil, que combinan un variado repertorio de acción colectiva recogiendo y actualizando las más diversas tradiciones emancipatorias³³

³² La peculiar *guerrilla electrónica* que se comunica desde la selva Lacandona con el mundo a través de internet trae las sugerentes metáforas del rico discurso político-poético del subcomandante Marcos, sugiriendo una nueva manera de concebir la lucha política y el pensamiento revolucionario. Es un factor clave en el despertar del aletargado imaginario político de la izquierda, en claro retroceso desde la caída del muro en 1989, que vuelve a reclamar la reivindicación de los *invisibles* en la era mediática, que se tienen que volver a *tapar el rostro para ser reconocidos*, y que frente a la homogeneización cultural reclaman a toda la izquierda la necesidad de pensar en el multiculturalismo con “un mundo donde quepan muchos mundos”. Bajo la consigna de “mandar obedeciendo” se crea una nueva tensión entre la lógica de vanguardia de la lucha armada y una lectura no dogmática como la que hasta el momento había realizado el marxismo vulgar de la sociedad civil.

³³ En este sentido es significativo el éxito alcanzado por en análisis divulgativo de la periodista Naomi Klein (2001,2002) cuando aborda las nuevas condiciones que pesan en la lógica de producción y consumo del capitalismo globalizado. Su denuncia de cómo las marcas corporativas disputan el sentido

A lo largo de los días de la *contracumbre*, el foro organizador local intenta programar además de los talleres y jornadas donde se discute la *propuesta*, el discursar público y mediático de la *protesta*: las estrategias carnalescas del movimiento *Reclaims the Streets* y el reversivo activismo artístico-cultural del *bloque rosa*; la *acción directa no violenta* de las redes desobedientes articuladas en la cultura *autónoma* de los centros sociales ocupados existentes en diversas ciudades europeas; la estrategia no violenta de grupos cristianos y de otros pacifistas; la acción violencia -más o menos simbólica- de los grupos anarquistas y izquierdistas que continúan reclamando la lucha callejera; las tradicionales manifestaciones masivas y disciplinadas del movimiento obrero. En conversaciones previas con las autoridades policiales se negocian horarios, recorridos y objetivos de la acción de estos colectivos que intentan “sitiar con las multitudes” la reunión de los poderosos presionado sobre las zonas de seguridad asignadas por las autoridades locales. Con mayor o menor intensidad, en los siguientes años viven protestas de este tipo Bangkok, Washington, Ginebra, Praga, Niza, Buenos Aires, Québec, Barcelona, Gotemburgo, Génova, Melbourne, Bruselas, Nueva York, Madrid, Roma, Johannesburgo, además de Davos³⁴.

de los vínculos sociales a las instituciones políticas en un contexto altamente mediatizado y su propuesta de apoyar las resistencias culturales que buscan recuperar el espacio público y convertir a los consumidores en actores políticos son sin duda clave de éxito editorial. Detecta y analiza de manera divulgativa una coyuntura histórica que hace cada vez más patente como las (re)definiciones políticas en torno a la ciudadanía se están produciendo en el ámbito cultural-comunicativo.

³⁴ Tras los acontecimientos de Praga, que obligaron a clausurar la reunión un día antes de lo previsto, el presidente del BM, James Wolfensohn, declaraba haber subestimado la capacidad de las ONG de organizar reuniones y protestas, al mismo tiempo que declaraba compartir sus críticas en relación a la necesidad de crear mecanismos más efectivos y poderosos para luchar contra la desigualdad (*El País*, 25/9/2000). Tras la *batalla de Génova* contra la cumbre del G-8 –en la que una represión indiscriminada convierte en tumulto una manifestación de trescientas mil personas-, el por entonces

El aumento de afluencia de activistas a las *contracumbres*, la creciente simpatía en la opinión pública, el trabajo cada vez más activo de las redes transnacionales, ponen de manifiesto la posibilidad de lanzar una respuesta a la pesada hegemonía neoliberal consolidada a lo largo de las dos últimas décadas. Lo que estimula la creación de nuevas redes, como la puesta en marcha en 1999 con el *Grito de los Excluidos* en 12 países latinoamericanos, que apoyado por las jerarquías eclesiales progresistas de América Latina, busca generar coordinación continental en las acciones de protesta entre las redes de organizaciones de base presentes incluso entre los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos (Bassegio, 2002)³⁵.

Con estas dinámicas como telón de fondo, en 1998 una serie de redes empezaban a plantear la necesidad de una reunión paralela en el hemisferio sur al encuentro que desde hace más de

primer ministro francés Jospin declaraba que Europa tenía la necesidad de pensar en la puesta en marcha de la Tasa Tobin (El País, 17/7/2001). La nueva política de multitudes cuestionan su representatividad, manejando eslogan como “They are G-8, we are 6.000.000.000” (Génova) o “Somos millones y el mundo no es vuestro” (Barcelona).

³⁵ Busca promover una agenda común de movilización –cuyo punto central es hoy la repulsa a la propuesta norteamericana de Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la deuda externa, en fechas clave como el descubrimiento de América, el día internacional de la reforma agraria y el de los derechos humanos. Han llegado a reunir manifestaciones de 20.000 personas en Nueva York. Ver www.gritodosexcluidos.com.br. Por estar vinculada a cuestiones Norte Sur e inspirada en las consultas realizadas por los zapatistas en México y el Jubileo Sur en Brasil, también puede destacarse la Consulta Social Europea (CSE), impulsada desde España desde el año 2000 por la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa (RCADE). Junto a otras redes europeas se intentará realizarla durante las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2004, con la novedad de potenciar la horizontalidad y la democracia participativa, descentralizando a nivel local la elaboración de las preguntas a realizar, articuladas en cuatro áreas de preocupación ciudadana (guerra global y otras formas de violencia; economía; democracia social y libertades civiles; ecología y medio ambiente) en los niveles local y europeo (Calle, 2002; Pereda y Villagrà, 2002; www.consulta europea.org).

veinte años tienen gobiernos y corporaciones multinacionales en la ciudad suiza de Davos. Surgía así la voluntad de poner en marcha el Foro Social Mundial (FSM), con ocho entidades que firmaban el “Acuerdo de cooperación” para realizarlo por primera vez en enero de 2001 en Porto Alegre. Claramente representativas del tipo de organizaciones que constituyen los nodos de la sociedad civil transnacional en red, se asociaban movimientos sociales, ONG, sindicatos e institutos de investigación y sectores de la Iglesia (que contaron con el firme respaldo *facilitador* de las administraciones locales y regionales gobernadas por el Partido dos Trabalhadores)³⁶.

Sin espacio para poder analizar en detalle las dinámicas participativas que se intentan activar en estos foros sociales, no se puede dejar de apuntar las novedades que trae el FSM como espacio de encuentro para “la búsqueda y construcción de alternativas a la globalización neoliberal” a partir de la vaga consigna de *otro mundo es posible*³⁷. No sin tensiones, convergen en estas redes iniciativas procedentes de colectivos de orientación reformista y radical, reelaborando paulatinamente las pautas de la *propuesta* y la *protesta* en los parámetros políticos de lo que pretende ser un nuevo internacionalismo para la ciudadanía planetaria, que busca plasmar las necesidades básicas

³⁶ Las entidades locales que se hacían responsables del evento son la Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales (ABONG); Acción por la Tributación de las Transacciones Financieras en Apoyo a los Ciudadanos (ATTAC); la Comisión Brasileña Justicia y Paz, de la CNBB (CBJP); la Asociación Brasileña de Empresarios por la Ciudadanía (CIVES); Central Única de los Trabajadores (CUT); IBASE - Instituto Brasileño de Análisis Socio Económicos; CJG - Centro de Justicia Global (CJG) ; el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Para conocer como cuaja la idea de mano del empresario brasileño Oded Grajew ver Whitaker (2001).

³⁷ Esta capacidad de atracción se ilumina con algunas cifras: se acreditan 3.180 periodistas de más de 116 canales de televisión y 467 periódicos de 48 países para comunicar una reunión que aglutina más de 50.000 personas en torno a casi 5.000 delegados de organizaciones de 131 países. Ver www.portoalegre2003.org

de un modelo de ecodesarrollo donde la economía se oriente a la protección de los empobrecidos y la política a la protección de los derechos humanos y la paz.

Una suerte de fusión discursiva y programática se va produciendo en una mecánica de trabajo donde las aportaciones de distinta procedencia se ordenan en ejes temáticos que discuten en mesas y talleres. De esta manera se va conformando a) una serie de principios y fundamentos del modelo de sociedad que se quiere construir; b) una agenda de iniciativas destinadas a resolver los problemas crónicos de los países pobres específicos (alimentación, agua, salud, educación, medio ambiente, derechos humanos, paz y desarme); c) el diagnóstico acerca de los obstáculos políticos e institucionales de la globalización neoliberal a superar por estos países (deuda externa, corporaciones multinacionales, instituciones financieras y movimientos especulativos de capitales); d) las propuestas concretas de redistribución de la riqueza y los instrumentos de financiación de la lucha contra la pobreza (control sobre movimientos especulativos de capitales, condonación de deuda, nuevas instituciones de regulación internacional, etc.) (Díaz Salazar, 2002; Fernández Such, 2003)³⁸.

La “carta de principios” que deben asumir las entidades participantes explicita la “oposición al neoliberalismo, al dominio del mundo por el capital y por cualquier forma de imperialismo”, permitiendo sólo la participación de entidades de la sociedad civil –los partidos quedan excluidos, no así sus militantes individuales-. La defensa del pluralismo ideológico y la diversidad democrática lleva a rechazar todo totalitarismo y a las organizaciones que atenten contra la vida de las personas como método de lucha política. Se perfila así un marco de trabajo

³⁸ Este esquema -elaborado por Díaz Salazar en el Observatorio de Políticas de la Globalización y los Movimientos Sociales de la Universidad Complutense de Madrid) sirve para reducir la complejidad y poder abordar el dinámico proceso de construcción de alternativas a viejos y nuevos problemas desde espacios políticos que a su vez se encuentran en profundo reacomodo ideológico y político.

abierto para la reconstrucción de una crítica al capitalismo que, desde una perspectiva participativa, da cuenta de la crisis de la dinámica representativa de la democracia liberal en un contexto multicultural que exige la redefinición de identidades políticas, sociales, étnico-lingüísticas e ideológicas³⁹. Se puede decir que la propuesta de construcción de foros sociales –con su pretensión de articularse local y temáticamente- ha logrado representar un polo de *lo social* en el plano transnacional que ahora tiene el reto de *entrar* a formar parte del debate en los sistemas político-electorales nacionales.

5) A modo de conclusión: redescubriendo la comunidad desde la participación cultural

A lo largo de estas páginas se ha intentado poner de manifiesto cómo, desde los años setenta, los movimientos sociales han diversificado su accionar ampliando su dinámica de trabajo en red y articulando la participación de múltiples entidades sociales y cívicas en la búsqueda de reconocimiento de las demandas de la ciudadanía. El *pueblo* transita hacia la *sociedad civil* en una coyuntura histórica marcada por las tensiones derivadas de un contexto autoritario en el que la crisis fuerza la revisión de un modelo de desarrollo estado-céntrico. A lo largo de este tránsito se amplía la complejidad institucional de las redes en las que transcurren los procesos participativos que

³⁹ En este sentido no se puede dejar de mencionar la puesta en marcha en 1999 de la red del *Grito de los Excluidos*, que apoyado por las jerarquías progresistas del continente busca generar coordinación continental en las acciones de protesta entre las redes de organizaciones de base, llegando a estar presentes incluso las organizaciones de inmigrantes *latinos* en Estados Unidos. Por medio de la convergencia con las luchas ya encauzadas buscan promover una agenda común de movilización en torno a denominadores comunes en el ámbito global, cuyo punto central es hoy la repulsa a la propuesta norteamericana de Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la deuda externa, aprovechando fechas clave como el descubrimiento de América, el día internacional de la reforma agraria y el de los derechos humanos. Ver www.gritodosexcluidos.com.br

impulsan los movimientos sociales, alcanzando ámbitos transnacionales y buscando reformular posicionamientos y discursos político-ideológicos, y también prácticas institucionales de los distintos mediadores sociales –partidos y sindicatos, pero también de ONG e iglesias-. Van apareciendo nuevos foros de encuentro y coordinación conectados a nuevas redes de socialización y sociabilidad en un tercer sector que pretende (re)presentar *la vocación de autonomía de lo social* frente a los imperativos impuestos por las lógicas tanto del poder político como del poder económico.

Como hemos visto, en el plano local la experimentación participativa llega a producir innovaciones institucionales como los *presupuestos participativos*, emergiendo la posibilidad de construir, desde este plano micro, un nuevo contrato social para la ciudadanía sobre un marco democrático renovado. En el plano global la innovación en los repertorios de participación-movilización se dirigen a generar visibilidad pública y mediática sobre los macro problemas de la gobernabilidad transnacional y sus alternativas. En sus articulaciones *glocales* la aproximación entre los múltiples sectores reformistas y radicales promueve por un lado, la combinación de *protesta* contra los que se consideran responsables del *mal gobierno* en los diversos niveles de decisión política, y por otro lado, de *propuesta* de alternativas para transitar hacia una gobernabilidad democrática de la globalización –contando con el aval de sus nuevas articulaciones institucionales (centros de investigación, universidades, organismos multilaterales) que empiezan a generar una mayor credibilidad y capacidad argumentativa a sus posiciones.

La participación de los subrepresentados empieza a perfilarse en la periferia capitalista como un motor clave para la (re)construcción de ciudadanía y la mejora de la vida democrática en las coordenadas de la globalización neoliberal. No obstante, la propia participación está siendo objeto de un amplio debate que implica una comprensión mucho más amplia de la idea de democracia, que trasciende su marco estrictamente político-procedimental para definirse cada vez más sobre un

marco de transformación cultural del capitalismo informacional. La cuestión de la *visibilidad* de las demandas del espacio de lo social y su naturaleza conflictiva en el ámbito mediático se convierte en una cuestión clave para conectar virtuosamente agendas públicas, informativas y políticas.

Uno de los puntos fundamentales reside en cómo aprovechar las sinergias producidas en la proximidad lograda entre espacios ideológicos reformistas y radicales en las redes por la justicia global. Queda pendiente una reflexión todavía sujeta a la generosidad autocrítica y a la capacidad de diálogo entre ambos polos, que tiene en la interpretación del conflicto social uno de sus mayores desafíos para poder hacer avanzar la construcción de un modelo de democracia participativa.

El espacio radical está abocado a un acompasamiento en la transformación del imaginario revolucionario y/o étnico-comunitario, que si bien genera la subjetividad de resistencia necesaria para asumir el conflicto social y político en situaciones adversas, marcadas por la subordinación y la represión, también genera dinámicas que, en ocasiones, tienden al aislamiento socio-político de sus experiencias respecto al conjunto social. Un exceso de ideología comunitarista y/o vanguardista puede pesar sobre determinadas prácticas participativas que, aún teniendo altos grados de creatividad social e innovación cultural, no permiten potenciar un aprendizaje para otros sectores sociales que buscan rearticular las diversas iniciativas dentro de una estrategia de lucha política de masas, al mismo tiempo que dificultan su defensa como modelo de producción social alternativo y emancipador dentro en el horizonte de la democracia participativa⁴⁰.

⁴⁰ Esta crítica tiene una interesante ilustración en la discusión en torno al *Movimento Sem Terra* de Navarro (2002 a y b) y Martins (2002), donde se critica un exceso de comunitarismo fundamentado en planteamientos marxistas vulgares, con concepciones revolucionarias finalistas y refractarias de la idea de democracia. Frente a Martins que enfatiza el enorme y costoso proceso organizativo puesto en marcha con escasos recursos no hace todavía dos décadas, Navarro apunta la necesidad de criticar comportamientos

Del lado reformista, una vez constatado el progresivo estrechamiento de los márgenes de los espacios de gestión en las coordenadas de la globalización neoliberal para salvaguardar los logros de bienestar social y político, queda por ver cómo se articula una propuesta de reforma capaz de contener la creciente capacidad (*des*)regulatoria del mercado global. A nadie se le escapa que en la actual coyuntura recuperar el ámbito político como espacio de definición social exige enfrentar y remover pesados intereses político-económicos e inercias burocrático-administrativas que han colonizado instituciones de gobierno tanto multilaterales como locales. Si una parte significativa de los sectores del reformismo social (ONG, iglesias y centros de investigación) están apostando por alimentar estas redes es porque se empieza a ser consciente de que sin el concurso de una importante energía participativa este reacomodo de lo social es inviable.

Si bien el cambio revolucionario concebido como de *toma del estado para transformar la sociedad* ha quedado en buena medida invalidado con el fracaso histórico del socialismo burocrático del este europeo a la hora de legitimar su dominación, la gestión socialdemócrata del bienestar tiene el enorme desafío de legitimar su acción reformista ante la omnipresencia de una esfera mediático-audiovisual adversa. En ésta la banalización cultural reproduce impunemente como un

autoritarios de los liderazgos que intermedian en las políticas gubernamentales, las propuestas educativas con un alto componente de adoctrinamiento, las iniciativas colectivizadoras forzadas, la falta de democracia interna y la marginación de la disidencia. Sin esa dimensión extrema de autonomía comunitaria que surge en el campamento rural, las distintas redes radicales del norte están redefiniendo paulatinamente y no sin dificultades sus identidades, imaginarios y estilos políticos vanguardistas y asamblearios. Su objetivo de sostener la visibilidad del conflicto social está crecientemente marcada por un contexto institucional que sufre las tensiones de la política antiterrorista implementada tras el 11 de septiembre, que dificulta cualquier expresión de violencia sociopolítica en la medida que las criminaliza.

modelo de comportamiento de marcados rasgos individualistas, consumista, antipúblico y antiestatista, que se muestra políticamente desresponsabilizadora frente a los retos impuestos por la globalización.

En una coyuntura histórica compleja desde el punto de vista del direccionamiento del cambio social, en el campo de la construcción alternativa se apunta la necesidad de una *teoría democrática de la ilegalidad no violenta* (Santos, 2001). La ampliación de las esferas público-mediáticas se convierte en una cuestión central para las redes de movimientos sociales que buscan generar una nueva legalidad confrontando la vigente con sus dinámicas socialmente conflictivas. Si no se consigue iluminar con una perspectiva de construcción de ciudadanía, la acción colectiva de protesta que apela al sentido de justicia compartido por la mayoría de la población no puede dar cuenta del carácter políticamente simbólico que está en la base de su accionar. El grado de madurez de una sociedad en lo que respecta a su cultura política se pone de manifiesto en la autolimitación que se imponga la práctica de la desobediencia y la respuesta que le den las elites políticas (Cohen y Arato, 1992)⁴¹.

Frente a la interpretación negadora -impuesta por la epistemología elitista del neoconservadurismo- que identifica el conflicto social como desviación a criminalizar y reprimir, éste tiene que ser, en el campo democrático-emancipador, interpretado en el marco de las tensiones por la (re)distribución del poder en las sociedades complejas. Esto reclama una reformulación de la idea democrática que la habilite nuevamente como espacio de disputa de proyectos con muy distintas

⁴¹ Fabio Konder Comparato, reconocido jurista brasileño del entorno del PT, reflexionaba sobre la experiencia de Gandhi en la India de los años 30, y se mostraba esperanzado de que el presidente Lula tuviese el carisma necesario para enfrentar los condicionantes externos que pesan sobre cualquier posibilidad de reforma liderando una estrategia de desobediencia civil pacífica (*Caros Amigos*, n97, marzo de 2003, entrevista íntegra cedida generosamente por la redacción)

capacidades y recursos para acceder a la actual esfera pública mediática y a la representación política. Un verdadero reto civilizatorio en una coyuntura donde la guerra global permanente al terrorismo hace emerger la lógica amigo enemigo en los parámetros culturales marcados por Occidente, ractualizando la lógica excluyente de la guerra fría.

La crisis de representación de la política electoral parlamentaria se viene poniendo de manifiesto tanto en el norte como en el sur. A pesar de la atención prestada a las cuestiones de procedimiento institucional por la última generación de estudios de democratización, es patente la necesidad de revisar la calidad democrática que producen las instituciones liberales en este nuevo contexto de comunicación política dinamizado en los parámetros del marketing. Buena parte de la actual reflexión social empieza a propiciar una nueva perspectiva multidisciplinar de crítica cultural de la política y del poder, contemplando la construcción democrática desde los campos de la educación, la comunicación y la producción cultural.

Esta es una perspectiva que se apoya tanto en iniciativas sociales como en reflexiones académicas que se vienen desarrollando en la región desde los años setenta. Ejemplo de esto es la intensa actividad realizada por las redes de educación popular tempranamente estimuladas por el método de alfabetización promovido por Paulo Freire y posteriormente desarrollado en experiencias de educación y comunicación popular en el campo radiofónico y de la alfabetización audiovisual. Es ilustrativo el trabajo realizado por las redes de Educación Alforja (presente en todos los países centroamericanos) o la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) (con entidades asociadas en 18 países de la región). Ambas redes han impulsado una importante reflexión sobre la democratización y los derechos humanos desde

la educación y la cultura popular. (Aparici, 1993; Kaplún, 1998; Alfaro, 2000)⁴².

Con la paulatina consolidación del FSM de Porto Alegre se está actualizando el debate promovido por el Informe de la UNESCO “*Un solo mundo, múltiples voces*”, cuyo abandono tras su publicación a principios de los años ochenta, fue forzado por la hegemonía neoliberal. “En defensa de la diversidad cultural y de los imaginarios nacionales” es el título de la carta de conclusiones del I Foro Mundial del Audiovisual realizado en su primera edición, que, además de contar con un eje temático específico centrado en Media, cultura y contra-hegemonía, pone en marcha una dinámica de trabajo comunicativo mancomunado entre periodistas y entidades volcadas al trabajo en comunicación (www.ciranda.net).

El eslogan “Don’t heat the media, be the media” de Indymedia ilustra adecuadamente la nueva dinámica participativa generada por el uso de las nuevas tecnologías telemáticas. Se producen iniciativas mediáticas y culturales de *periodismo comunitario*, de creación de medios independiente, de reivindicación de nuevas regulaciones para el sector audiovisual, de estímulo al uso de software libre y el *copyleft* promovido por la comunidad Linux, de puesta en marcha de observatorios de vigilancia de los medios. Otras iniciativas en red como la Campaña por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS), promovida entre otros por la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), intentan trasladar tanto la reflexión crítica como estas demandas de acceso a espacios políticos institucionales (Burch, 2003).

En el campo de la reflexión, las ciencias sociales, particularmente la antropología y los estudios de comunicación,

⁴² El número 110 de la revista Documentación Social de Cáritas española (1998) presenta un monográfico sobre educación y transformación social en el que se traza una sugerente panorámica de la influencia del trabajo de Freire tanto en las ciencias sociales y educativas, como en la acción comunitaria y transformadora de los movimientos sociales y las comunidades de base.

vienen analizando el tortuoso periplo de hibridaciones asimétricas que viven las culturas e identidades populares-nacionales en la nueva ciudad latinoamericana, crecientemente transformada por consumos mediáticos y culturales transnacionalizados. La lógica mercantil y privatizadora que acompaña la desregulación del audiovisual en la coyuntura de expansión tecnológica potencia la emergencia de una perspectiva crítica sobre los procesos de cambio cultural surgidos en los años noventa. Se hace patente la necesidad de redefinir la política cultural nacional ante una integración transnacional compleja, de tendencia homogeneizadora, que procesa memorias históricas, identidades sociales y consumos culturales generando nuevas comunidades de sentido (Calderón, Hopenhayn y Ottone, 1994; García Canclini, 1995 y 1999; Jelin, 2001).

Ante una esfera pública central crecientemente cerrada - al orientarse cada vez más de forma exclusiva por la lógica agregada de medición de la opinión pública (sondeos, audiencias y urnas)- se subraya la necesidad de generar acceso y conexión a las esferas públicas periféricas dinamizadas por una opinión discursiva donde están presentes los argumentos de los distintos grupos de la sociedad civil (Sampedro, 2000). Una mayor circulación de información y producción cultural para comprender los problemas sociales y los diálogos interculturales a los que aboca la globalización, son algunos de los objetivos que se plantean promover distintas redes de investigadores y entidades. Proponen nuevas concertaciones institucionales que busquen la activa participación de los distintos sectores institucionales, profesionales y sociales implicados en la producción y el consumo cultural desde las industrias culturales, los medios de comunicación y los sistemas educativos e investigadores (como pueden ser la publicación de debates que se impulsan desde CLACSO, FLACSO, Convenio Andrés Bello, la Organización de Estados Iberoamericanos) (Roncagliolo, 1999; Mato, 2001; Lacarrieu y Álvarez, 2002; OEI, 1995 y 2002).

En última instancia, lo que se está empezando a plantear es la necesidad de reconocer que las esferas mediáticas y

culturales son espacios de representación social e ideológico-cultural que preceden, abriendo o cerrando, cualquier forma de representación política. Esto conduce a procurar una experimentación en el campo de la comunicación política que busque una mejor representación de *lo social* –y sus consustanciales dinámicas participativas de naturaleza conflictiva-, como condición necesaria para recomponer los debates multiculturales e ideológicos requeridos para enfrentar los retos de la globalización. Activar un nuevo modelo de desarrollo precisa redefinir las relaciones entre economía y cultura, donde la participación para la construcción de ciudadanía se convierte en un referente político fundamental ⁴³.

De esta manera se activa revisión cultural de la participación en el ámbito político institucional, pero también de las iniciativas que se producen en el campo de la economía y en los espacios institucionales donde se reproduce la cultura. Un nuevo ángulo para analizar las potencialidades de ampliación de los cánones democrático, del reconocimiento multicultural (tanto de la igualdad como de la diferencia), de la producción (con la dimensión cultural en el ámbito del trabajo y del consumo), que permita valorar nuevas soluciones –muchas de ellas, procedentes de formas de conocimiento ignoradas o marginadas- para reinventar la emancipación social (Santos, 2002). Una tarea que reclama el compromiso activo de las ciencias sociales con el cambio social orientado por la noción de ciudadanía, que haga efectiva la reflexividad de esta producción de conocimiento, información y

⁴³ En este sentido el caso venezolano apunta dinámicas interesantes para futuras investigaciones. Por un lado, el alto componente *mediático* que tuvo el golpe de estado contra el presidente Chávez en abril del 2002, así como la experimentación iniciada en programas como Aló Presidente abren nuevas perspectivas para el estudio entre democratización y medios. Por otro lado, el imaginario político y el consumo cultural que protagonizaron las clases medias en la posterior revuelta durante la huelga petrolera, abren nuevos interrogantes sobre su posibilidad de participar en proyectos de desarrollo nacional que ubiquen entre sus prioridades las aspiraciones de las clases populares.

debates públicos, que tienen que rebasar sus respectivas áreas de trabajo para ofrecer soluciones multidisciplinares que abran discusiones sociales políticamente articuladas en la sociedad civil (Hopenhayn, 1992; Kaplan, 1999; García Canclini, 2002)⁴⁴.

La participación, desde la perspectiva de estas nuevas prácticas y discursos, se presenta como un factor fundamental para recuperar el diálogo políticamente transformador donde los problemas y conflictos ganen visibilidad como primer paso para realizar un tipo de procesamiento político del debate democrático que asuma la complejidad social y la ineludible lógica antagonista también presente en el proceso social. Lechner (1986) construyó un importante ángulo epistémico para comprender la tarea cultural pendiente para devolver el sentido emancipador de la política, cuando nos prestó la metáfora de *la siempre conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado*.

No obstante, este *redescubrimiento de la ciudadanía social* que se ha intentado mostrar en estas páginas analizando las nuevas dinámicas de la participación, exige una nueva racionalización y flexibilización del Estado, con el objetivo de que sea más austero y menos megalómano, al mismo tiempo que esté más atento a las demandas concretas, cercanas y reales de la población (Alonso y Jerez, 1997).

⁴⁴ El caso del portugués Boaventura de Sousa Santos es ilustrativo del compromiso con esa doble vertiente de reflexividad que los científicos sociales pueden aportar a la región: como epistemólogo aboga por el mencionado enfoque crítico de una *sociología de las ausencias* que permite descubrir en lo emergente buenas experiencias para reconstruir una nueva perspectiva emancipatoria (Santos, 2002). Al mismo tiempo, su compromiso con la acción política se pone de manifiesto en su activo trabajo con las redes que construyen los foros sociales y temáticos del FSM. La reflexión de García Canclini (2002) explicita la necesidad de reforzar la elaboración de repuestas colectivas en las ya activas redes presentes en la región (consejos y facultades latinoamericana de ciencias sociales, CLACSO y FLACSO).

El mayor problema para articular la participación que se produce en el plano micro y el ámbito de decisión macro político-estatal son los partidos políticos, que han agotado su potencial como agentes autónomos de cambio social. Los partidos políticos han perdido relevancia en la globalización al estar atrapados en la *política informacional* y en la plataforma constituida por las instituciones del Estado nación. Desde esta perspectiva son más *negociadores influyentes* a tener en cuenta en el proceso de construcción de un proyecto que *innovadores poderosos* de los que se pueda esperar propuestas de cambio (Castells, 1998).

No obstante, siguen siendo instituciones mediadoras clave tanto para procesar las demandas de la sociedad en el ámbito de la política local, nacional e internacional, como para potenciar la institucionalización estatal y cultural de los nuevos códigos que aportan los movimientos sociales para repensar la sociedad. Dependiendo de cómo la coyuntura histórica permita tramitar el conflicto social, las estrategias de acción de los movimientos pueden llegar a generar los espacios de diálogo suficientemente estructurados y visibles como para que los partidos políticos puedan asumir mayor protagonismo en la direccionamiento de las propuestas transformadoras que ellos impulsan. Esto obliga a partidos y a los múltiples actores del tercer sector a repensar cómo se tramita el conflicto social en la esfera público-mediática cuestionando la *lógica elusiva de "centro" electoral en la política informacional*; cómo se construye la acción coordinada de estas coaliciones internacionales para abordar temáticas globales; y cómo se legitima la necesaria experimentación institucional democratizadora que se debe buscar tanto a nivel local como global.

La toma de posesión del presidente argentino Nestor Kirchner en el periodo más crítico vivido por un país considerado modelo de las reformas neoliberales durante más de una década por los organismos multilaterales, fue ilustrativo del nuevo ciclo que intenta abrirse paso en América Latina. La presencia de presidentes

de cinco estados (*Lula Da Silva* de Brasil; Ricardo Lagos de Chile; Hugo Chávez de Venezuela; Fidel Castro de Cuba; Lucio Gutiérrez de Ecuador) que, con más o menos aciertos, están buscando alternativas para el desarrollo nacional y regional que integren los sectores excluidos en el modelo neoliberal, era destacada por la opinión pública internacional. Con distintas intensidades, en sus proyectos se reconoce la necesidad de una presencia activa de la sociedad *participando* para contrarrestar las dinámicas privatistas que deterioran la vida democrática, la eficacia de la acción estatal y para abrir debates en los foros transnacionales sobre las condiciones de la nueva gobernabilidad mundial.

No obstante, en el marco de la nueva realidad tecnológica, la estructuración del poder político-militar y financiero-económico a nivel global tiende a obstaculizar esta dinámica de experimentación de la propuesta de democracia participativa. La resolución de este desafío civilizatorio tiene que esperar el reposicionamiento de la socialdemocracia en la compleja coyuntura mundial generada tras el 11 de septiembre y el reacomodo europeo en el nuevo tablero internacional emergente tras la ocupación anglo-norteamericana de Irak. Una coyuntura que en buena medida viene marcada por el próximo ciclo electoral europeo y norteamericano y la capacidad de movilización de la opinión pública internacional.

7) Bibliografía

Alfaro, R. M. (2000): "Culturas populares y comunicación participativa: en la ruta de las redefiniciones" en revista electrónica *Rebelión y Cultura*, mayo 2002, web: http://www.eurosur.org/rebellion/cultura/cultura_comunicacion250500.htm

Alonso, L. E. y Jerez, A. (1997), "Hacia una politización del Tercer Sector", en Jerez (ed.) *¿Trabajo Voluntario o participación? Elementos para una sociología del Tercer Sector*, Madrid: Tecnos.

Assad, C., Ziccardi, A. (1989): "Política y gestión municipal en México", en Borja, Calderón, Grossi y Peñalva *Descentralización y democracia. Gobiernos locales en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Aparici, R. (coord.) (1993): *La revolución de los medios audiovisuales*. Madrid: ediciones de la Torre.

Auyero, J. (2001): *La política de los pobres*. Buenos Aires: Manantial

Barber, B. R. (2000): *Un lugar para todos. Cómo fortalecer la democracia y la sociedad civil*. Barcelona: Paidós

Bassegio, L. (2002) "La lucha de los movimientos sociales contra la deuda externa en Brasil", en *Documentación Social*, nº126, Madrid: Cáritas.

Benevides, M. V. (1991): *A cidadania ativa. Referendo, plebiscito e iniciativa popular*. Sao Paulo: Editora Ática.

Borja, J., Calderón, F., Grossi, M. y Peñalva, S. (1989), *Descentralización y democracia. Gobiernos locales en América Latina*, Santiago de Chile: Sur- CLACSO- CEUMT Barcelona.

Bresser Pereira, L C., y Cunill, N. (1999), *Lo público no estatal en la reforma del Estado*, Buenos Aires: Paidós.

Burch, S., (2003): Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Bávaro, República Dominicana, 29-31 de enero 2003). http://alainet.org/active/show_text.php3?key=3047.

Caldart, R.S. (2000): "O MST e a formação dos Sem Terra: o movimento social como princípio educativo" en Gentili y Frigotto (org.) *A cidadania negada. Políticas de exclusão na educação e no trabalho*. Buenos Aires: CLACSO

Calderón, F., Hopenhayn, M., Ottone, E. (1994): “Una perspectiva cultural de las propuestas de la CEPAL”. En *Revista de la CEPAL* n° 52. Abril 1994.

Calderón, F. y Dos Santos, M. (1987), *Los conflictos por la constitución de un nuevo orden*, Buenos Aires: Clacso.

Calderón, F.; Dos santos, M. R. (1984) *Hacia un nuevo orden estatal en América Latina*. Buenos Aires: Clacso

Calle, A. (2002) “Los movimientos sociales y la deuda externa. La Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa”, en *Documentación Social*, n°126, Madrid: Cáritas.

Cardoso, R. C. (1994): “A trajetória dos movimentos sociais” en Dagnino (org.) *Anos 90. Política e sociedade no Brasil*. Sao Paulo: Editora Brasiliense.

Carrera, N.I. y Cotarelo, M.C. (2000) “Reestructuración productiva y formas de la protesta social en Argentina”, en Garza Toledo (comp.) *Reestructuración productiva, mercado de trabajo y sindicatos en América Latina*, Buenos Aires: CLACSO-Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.

Craig, D., Porter, D. (2000): “Enmarcando la participación: proyectos, profesionales y organizaciones de desarrollo” en Melakou Tegegn (coord.) *Desarrollo y poder*. Barcelona: Intermón.

Cohen, J.L. y Arato, A. (1992), *Civil Society and Political Theory*, Cambridge: MIT Press.

Covey, J.G. (1998), "Critical Cooperation? Influencing The World Bank through Policy Dialogue and Operational Cooperation", Fox y Brown, in *The Struggle for Accountability. The World Bank, NGOs, and Grassroots Movements*, Cambridge: The MIT Press.

Cueva, A. (1988) “El ‘Sendero’ de la nueva derecha: un modelo para desarmar” en *Las democracias restringidas de América Latina*, Quito: Planeta-LetraViva

Cunill, N. (1991), *Participación Ciudadana. Dilemas y Perspectivas para la democratización de los estados Latinoamericanos*, Caracas: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

Dagnino, E. (1994) “Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania”, en Dagnino (org.) *Anos 90. Política e sociedade no Brasil*. Sao Paulo: Editora Brasiliense.

De Soto, H. (1987) *El otro sendero. La revolución invisible en el tercer mundo*, Bogotá: La Oveja Negra.

Díaz Salazar, R. (2002): “Sociedad civil mundial, movimientos sociales y propuestas para una globalización alternativa”, en Díaz Salazar (ed.) *Justicia global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre*. Barcelona: Icaria-Intermón Oxfam.

Diniz, E. y Boschi, R.R (1988) “La consolidación democrática en Brasil: procesos sociales, intermediación de intereses y modernización del Estado”, *Democratización, modernización y actores sociales*, Buenos Aires: 1988.

Diniz, E. (1982) *Voto e máquina política*, Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Doimo, A. M. (1995), *A Vez e a Voz do Popular. Movimentos sociais e participação política no Brasil pós-70*, Rio de Janeiro: Relume-Dumará-ANPOCS.

Donati, P. (1992), *Teoria Relazionale della Società*, Milán: Franco Angeli.

Donati, P. (1997), "El desarrollo de las organizaciones del Tercer Sector en el proceso de modernización y más allá", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 79.

Eizaguirre, M., Alberdi, J. (2001): “Libertades políticas: una asignatura pendiente en los índices de desarrollo humano”, en Pedro Ibarra y Koldo Unceta (coords.) *Ensayos sobre el desarrollo humano*. Barcelona: Icaria.

Escobar, A. Alvarez, S. y Dagnino, E. (eds.) (2000) *Política cultural y Cultura política. Una mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*, Bogotá: Taurus.

Fachin, R. y Chanlat, A. (1998), *Governo Municipal na América Latina. Inovações e perplexidades*, Porto Alegre: Sulina-Universidade/UFRGS.

Faria, H.; Sousa, V. de (1994): Premissas e algumas Proposições para uma Política de Cultura”, en Souza (org.) *Projeto cultural para um governo sustentavel en revista POLIS nº 17.*

Fedozzi, L. (1997), *Orçamento participativo. Reflexões sobre a Experiencia de Porto Alegre*, Rio de Janeiro: Tomo Editorial-Observatorio de Políticas Urbanas e Gestao Municipal (FASE/IPPUR).

Fernandes, R. C., (1994), *Privado porém público. O Terceiro Setor na América Latina*, Rio de Janeiro: Relum-Dumará.

Fernández Such, F. (2003) *El mensaje de Porto Alegre. Otro Mundo es posible y necesario*, Colección Pensamiento en Acción, nº6, Madrid: Servicio de Publicaciones de Cáritas.

Finkelievich, S. (coord.) (2000): *¡Ciudadanos a la red!. Los vínculos sociales en el ciberespacio*. Buenos Aires: Ediciones CICCUS-La Crujía.

FNPS (2001): Memoria del Foro Nacional de Participación Social (10 volúmenes correspondientes a los Foros regionales). México DF: Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, Secretaría de la Gobernación y Centro Nacional de Desarrollo Municipal.

Fischer, T. (1996): “Gestao Contemporânea, cidades estrategicas: aprendendo com fragmentos e reconfigurações do local”, en Fischer (org.) *Gestao contemporânea. Cidades estrategicas e organizações locais*. Rio de Janeiro: Fundação G. Vargas.

- Fontes, Breno. A Souto-Maior (1995) "Clientelismo urbano e Movimento popular: A construção das redes de poder", *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, nº81.
- Fox, J.A. y Brown, L.D. (1998), "Introduction", Fox y Brown, *The Struggle for Accountability. The World Bank, NGOs, and Grassroots Movements*, Cambridge: The MIT Press.
- García Canclini, N. (2002): *Latinoamericanos buscando lugar en este siglo*. Barcelona: Paidós.
- García Canclini, N. (1999), *La globalización imaginada*, México: Paidós.
- García Canclini, N. (1995): *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*. México DF: Grijalbo.
- Genro, T. Y Souza, U. De (1997) *Orçamento Participativo. A experiência de Porto Alegre*. Sao Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. (*El Presupuesto participativo de Porto Alegre*, Barcelona: del Serbal-Diputació-Patronat Flor de Maig (2000)
- Genro, T. (2003) *Crisis de la democracia. Derech, democracia directa y neoliberalismo en el orden global*, Barcelona: Ediciones del Serbal-Fundació Nouns Horitzons
- Giménez y otros (2002): "Nuevos escenarios de democracia local. Las experiencias de presupuestos participativos", en Blanco y Gomá (coords.) *Gobiernos locales y redes participativa*. Barcelona: Ariel.
- Giner, S. y Sarasa, S. (1997), "Altruismo cívico y política social" en Giner y Sarasa (eds.) *Buen gobierno y política social*, Barcelona. Ariel.
- Gomá, R., Rebollo, O (2001): "Democracia local y ciudadanía activa: reflexiones en torno a los prwesupuestos participativos" en J. Font *Ciudadanos y decisiones públicas*. Barcelona: Ariel.

Gordenker, L. y Weiss, T.G. (1996), "NGO Participation in the International Policy Process" en Weiss y Gordenker, *The Un, and Global Governance*, London: Lynne Rienner Publishers.

Gordon, S. (1997): "La cultura política d elas organizaciones no gubernamentales en México", en *Revista Mexicana de Sociología* 1/97.

Gorlier, J.C. (1992): "Democratización en América del Sur: una reflexión sobre el potencial de los movimientos en argentina y Brasil", en *Revista Mexicana de Sociología*. 4/92.

Gret, M., Sintomer; Y. (2003): *Porto Alegre. La esperanza de otra democracia*. Barcelona: Debate.

Hopenhayn, M. (1992): "¿Pensar lo social sin planificación ni revolución? En *Revista de la CEPAL n° 48. Diciembre 1992*

Ibarra, P. (1999), "Los movimientos por la solidaridad; ¿un nuevo modelo de acción colectiva?, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n°88.

Jacobi, P. (1989): *Movimentos sociais e políticas públicas*. Sao Paulo: Cortez Editora.

Jelin, E. (2001): "Exclusión, memorias y luchas políticas", en Mato (comp.), *Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización*. Buenos Aires: CLACSO.

Jelin, E. (1994), "¿Ciudadanía emergente o exclusión? Movimientos sociales y ONGs en los años noventa", *Revista Mexicana de Sociología*, 4: 91-108.

Jerez, A. y Revilla, M. (1997), "El Tercer sector. Una revisión introductoria a un concepto polémico" en A. Jerez (ed.) *¿Trabajo Voluntario o participación? Elementos para una sociología del Tercer Sector*, Madrid: Tecnos.

Jerez, A., (2001a), *Comunicación y ciudadanía. La visibilidad mediática de los problemas sociales como cuestión democrática*,

Colección Pensamiento en Acción nº3, Madrid: Servicio de Publicaciones de Cáritas.

Jerez, A., (2001b): *La construcción comunicativa del desarrollo y la cooperación en España (1994-2000). La disputa discursiva entre las ONG, los movimientos sociales y los medios de comunicación*. Tesis presentada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid

Kaplan, M. (1999): “El politólogo y la ciencia política: Retos y dilemas” en *Revista de Estudios Políticos (Nueva época) N° 106. Octubre-Diciembre 1999*.

Kaplún, M. (1998): *Una pedagogía de la comunicación*. Madrid: Ediciones de la Torre.

Keck, M. (1991): *PT, a lógica da diferença: o Partido dos Trabalhadores na construção da democracia brasileira*. Sao Paulo: Ática (Ensaio 137)

Krischke, P.J y Mainwaring, S. (1986) *A Igreja nas bases em tempo de transição (1974-1985)*, Porto Alegre: L&PM/CEDEC.

Krischke, P.J. (1999): “Aporías e interfases en los estudios de la democratización: análisis del régimen versus estudios culturales”, en *Revista Mexicana de Sociología*. N° 1, Vol. 61.

Lacarrière, M.; Alvarez, M. (comp.) (2002): *La (indi)gestión cultural. Una cartografía de los procesos culturales contemporáneos*. Buenos Aires: CICCUS-La Crujía

Lechner, N. (1986): *La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Monografías nº 91

Leite, M. de Paula (2000) “Sindicatos e desenvolvimento econômico: A experiência da Câmara Regional do Grande ABC no Brasil” en Garza Toledo (comp.) *Reestructuración productiva, mercado de trabajo y sindicatos en América Latina*, Buenos Aires: CLACSO-Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.

Martins de Carvalho, H. (2002): “A emancipação do movimento no movimento de emancipação social continuada (reposta a Zander Navarro) en Santos (org.) *Producir para viver. Os caminhos da produção noa capitalista. (Reinventar a emancipação social: para novos manifestos; 2)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Merino, A (2003) *Desde la proximidad democrática*, Barcelona: Ediciones del Serbal-Fundació Nouns Horitzons

Molina, C.H. (2001): “Bolivia con participación popular” en VVAA *Desarrollar lo local para una globalización alternativa*. Donosita: Hegoa- Euskal Fonda.

Moreno, P. H. (1996): “Organismos civiles y elaboración de políticas públicas”, en revista *Política y cultura* nº 7 Otoño 1996. México DF: Universidad Autónoma Metropolitana- Casa abierta al tiempo.

Munck, G. L. (1995): “Algunos problemas conceptuales en el estudio de los movimientos sociales” en revista *Mexicana de Sociología* nº 3.

Navarro, Z. (2002 a): “Movilização sem emancipação” en Santos (org.) *Producir para viver. Os caminhos da produção noa capitalista. (Reinventar a emancipação social: para novos manifestos; 2)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Navarro, Z. (2002 b): “O MST e a canonização da ação coletiva” (reposta a Horacio Martins Carvalho” en Santos (org.) *Producir para viver. Os caminhos da produção noa capitalista. (Reinventar a emancipação social: para novos manifestos; 2)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Nunes, E. O. de (1987): “Tipos de capitalismo, instituciones y acción social: notas para una sociología política del Brasil contemporáneo”, en Calderón y Dos Santos (comp.) *Los conflictos por la construcción de un nuevo orden*. Buenos Aires: CLACSO

Nunes, E. (1991): “El gobierno de las ciudades de tamaño medio en Brasil: Los casos de Marília y Piracicaba”, en VVAA *Municipio y*

democracia. Gobiernos locales en ciudades intermedias de América Latina. Santiago de Chile: Ediciones Sur.

Oliveira, Francisco de (1987) “Crisis económica y pacto social”, en Mario Dos Santos (comp.) *Concertación político social y democratización*, Buenos Aires: CLACSO

Pearce, J. (2000): “Las ONG y el cambio social: ¿agentes o facilitadoras?” en Tegegn *Desarrollo y Poder*. Barcelona: Intermón.

Peñalva, S., (1989): “situación y perspectiva de los gobiernos locales en Venezuela” en Borja, Calderón, Grossi y Peñalva *Descentralización y democracia. Gobiernos locales en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Pereda, C y Vilagrà, A. (2002) “Consulta Social Europea. Una Propuesta para trabajar en red en los próximos años”, en *Documentación Social*, n°129, Madrid: Cáritas.

Pérez Molina, O. (2001): “Guatemala: construyendo institucionalidad e incidencia social en el ámbito municipal”, en VVAA *Desarrollar lo local para una globalización alternativa*. Donosita: Hegoa- Euskal Fonda.

Piñar Mañas, J.L. (2001): *El Tercer sector iberoamericano. Fundaciones, asociaciones y ONG*. Valencia: Tirant lo Blanch

Putman, R. D. (2003): *Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy*. Princenton: Princenton University Press.

Reis, F.W (1988) “Partidos, ideología e consolidação democrática” en Reis y O’Donnel *A democracia no Brasil. Dilemas e perspectivas*, Sa Paulo: Vértice.

Reilly, C.A. (1998): “Redistribución de derechos y responsabilidades: ciudadanía y capital social”, en Bresser y Cunill (eds.) *Lo público no estatal en la reforma del Estado*. Buenos Aires: Piados.

Revilla, M. (2001), "Las ONG como mecanismos de participación política", en Revilla (ed.) *Las organizaciones no gubernamentales y la política: detalles de una relación*, Madrid: Istmo.

Roncagliolo, R. (1999): "Las industrias culturales en la videosfera latinoamericana", en García Canclini y Moneta (coords.) *Las industrias culturales en la integración latinoamericana*. Buenos Aires: Eudeba.

Rosenfeld, A., Vergara, D., Icaza, A.M. (1991): "Municipios en ciudades intermedias en Chile: Los casos de Talca y Loca".en VVAA *Municipio y democracia. Gobiernos locales en ciudades intermedias de América Latina*. Santiago de Chile: Ediciones Sur.

Rubinstein, J.C. (1994), *Sociedad civil y participación ciudadana*, Madrid: Ed, Pablo Iglesias.

Ruiz Olabuénaga, J. I. (Dir.) (2000), *El Sector no lucrativo en España*, Bilbao: Fundación BBV.

Sader, Eder (1988): *Quando novos personagens entraram em cena. Experiencias e lutas dos trabalhadores da grande Sao Paulo (1970-1980)*. Sao Paulo: Paz e Terra.

Sader, Emir, Silverstein, K. (1991): *Without Fear of Being Happy. Lula, the workers party and Brazil*. London. New York: Verso.

Sampedro, Víctor. (2000), *Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y urnas*, Madrid: Istmo.

Santos, B. de Sousa y Nunes, J.A (2003) "Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade", B. de Sousa (org) *Reconocer para liberar. Os caminhos do cosmopolitismo multicultural*, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira

Santos, B. de Souza y Rodríguez, C. (2002) "Introdução: para ampliar o cânone da produção", en Santos, B. de Sousa (org) *Produzir para viver. Os caminhos da produção nao capitalista*, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira

Santos, B de Sousa (2001), “As lições de Génova”, *Folha de Sao Paulo*, 30 de julho.

Santos. B de Sousa (2000), *Crítica da razão indolente: Contra o desperdício da experiência*, Porto: Afrontamento.

Santos, B. de Sousa (1999) *Reinventar la democracia, reinventar el estado*, Madrid: Sequitur

Serrano Oñate, M. (2002), "Las ONGD en la encrucijada: Del Estado de Bienestar a la Franquicia del Estado", en Revilla (ed.) *Las organizaciones no gubernamentales y la política: detalles de una relación*, Madrid: Istmo.

Scherer-Warren, I. (1993) *Redes de movimentos sociais*, Sao Paulo: Editorial Loyola-Centro Joao XXIII.

Singer, P. (2002): “A recente resurreição da economia solidaria no Brasil” en Santos (org.) *Producir para viver. Os caminhos da produção noa capitalista. (Reinventar a emancipação social: para novos manifestos; 2)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Tanaka, M. (1995): “La participación política de los sectores populares en América Latina”, en *Revista Mexicana de Sociología* 3/95

Vargas, H. (1991): “Las reformas municipales y la capacidad de gestión en Bolivia”, en *VVAA Municipio y democracia. Gobiernos locales en ciudades intermedias de América Laitna*. Santiago de Chile: Ediciones Sur.

Villasante, T. R. (coord..) (1994), *Las ciudades Hablan. Identidades y movimientos sociales en seis metrópolis latinoamericanas*, Bogotá: Nueva Sociedad.

Villasante, T. R. (1998), *Cuatro redes para Mejor-Vivir: Del Desarrollo local a las Redes para Mejor-Vivir (1) y De las Redes Sociales a las Programaciones Integrales (2)*, Buenos Aires: Lumen Humanitas.

Villas-Boas, R., Telles, V. (1995): *Poder local, participação popular y construção da cidadania*. Sao Paulo: Forum Nacional de Participação Popular nas administracoes Municipais.

Withaker, F. (2001): “Foro Social Mundial: orígenes y objetivos”, en Monereo y Riera (edits.) *Porto Alegre. Otro mundo es posible*. Barcelona: Viejo Topo.